SESION PÚBLICA ORDINARA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, EL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE LA DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ, Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN Y MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Hoy miércoles cuatro de abril de 2019, siendo las once horas con seis minutos, se abre la sesión pública ordinaria número dos, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por indicaciones de la Diputada Presidenta doy a conocer el orden del día. Lectura del Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

Colima, Colima, 04 de abril de 2019

I Lectura del orden del día;
II Lista de asistencia;
III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, de instalación formal de la sesión;
IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número 01, celebrada el 01 de abril de 2019;
V Síntesis de comunicaciones;
VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado conjuntamente por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y la de Justicia, Gobernación y Poderes, por el

que se propone reformar el inciso e) de la fracción I del artículo 47 de la Ley de Municipio Libre del Estado de Colima;

VII Asuntos generales;

VIII Convocatoria a la próxima sesión; y

IX Clausura.

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la Diputada, se pregunta a los Diputados en votación económica si es de se aprueba el orden del día, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Presidenta que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará la Sesión Pública Ordinaria número dos, de este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional. A continuación solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.

DIP. SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. En cumplimiento de la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna; Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos César Farios Ramos; Dip. Araceli García Muro; Dip. Jazmín García Ramírez. Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Guillermo Toscano Reyes; Dip. Vladimir Parra Barragán; Dip. Ana María Sánchez Landa; Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco; Dip. Arturo García Arias; Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Lizet Rodríguez Soriano; Dip. Julio Anguiano Urbina; Dip. Rogelio Salinas Sánchez, Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Luis Fernando Antero Valle, ausente con justificación; Dip.

Martha Alicia Meza Oregón; Dip. Remedios Olivera Orozco; Dip. Rosalva Farías Larios; Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio; Dip. María Guadalupe Berver Corona, la de la voz. La Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía, el Dip. Julio Anguiano Urbina, la Dip. Ana Karen Hernández Aceves, el Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez; están ausentes con justificación. Dip. Carlos César Farías Ramos. Ciudadana Presidenta, informo a usted que están presentes 19 legisladores, faltando con justificación seis de los Diputados.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Solicito a las y los Legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la instalación formal de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, con la asistencia de 19 Diputadas y Diputados, siendo las 11 horas con trece minutos, del cuatro de abril del año 2019, se declara formalmente instalada esta Sesión Pública Ordinaria Número dos y por haber quórum legal, las resoluciones que en esta se tomen serán válidas. Conforme al Cuarto Punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria Numero uno, celebrada el 1º de abril del presente año. Pueden sentarse.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputada Presidenta, en virtud de que el acta ya se fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación en su caso.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Se pone a consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la Sesión Ordinaria número uno.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica, favor de hacerlo

levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por mayoría.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. En virtud de haberse votado mayoría, declaro aproada la propuesta de obviar la lectura del acta de la Sesión Ordinaria número uno, celebrada el día 1º de abril del año en curso, por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la Sesión Ordinaria número uno.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión ordinaria número uno, celebrada el 1º de abril del 2019.

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 01 UNO DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 01 UNO DE ABRIL DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:23 doce horas con veintitrés minutos del 01 de abril de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 01uno, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón,

diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea y no motivar intervenciones de los legisladores, fue aprobado por unanimidad, por lo que a continuación se transcribe:

Orden del día

I Lectura del orden del día;

II Lista de asistencia;

III Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión, y de apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura;

IV Síntesis de Comunicaciones;

V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se amplían, en el ejercicio fiscal 2019, los plazos señalados en los artículos 53, fracción IV, segundo párrafo, y 41 Z BIS 12, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima;

VI Asuntos generales;

VII Convocatoria a la próxima sesión; y

VIII Clausura.

2. En el segundo punto del orden del día, la Diputada Secretaria Alma Lizeth Anaya Mejía pasó lista de asistencia, estando presentes 23veintitrés de los 25 diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco y la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio.

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez solicitó a los legisladores y público en general ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 12:29 doce horas

con veintinueve minutos del día 01 primero de abril del año 2019 dos mil diecinueve, se declaró formalmente instalada la sesión ordinaria número 01 uno y se declaró la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima Novena Legislatura.

4. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones. En relación con la petición anterior, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía propuso a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea y,al no motivar intervenciones de las y los legisladores, fue aprobada por unanimidad, sin observaciones.

5. En el quinto punto del orden del día, el Diputado Julio Anguiano Urbina dio lectura al dictamen con proyecto de Decreto, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se amplían, en el ejercicio fiscal 2019, los plazos señalados en los artículos 53, fracción IV, segundo párrafo, y 41 Z BIS 12, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima. Acto continuo, se consultó en votación económica si el documento debía ser discutido en la presente sesión, siendo aprobada la propuesta por mayoría, por lo que el dictamen de referencia fue puesto a consideración de la Asamblea, motivando la intervención del Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, quien se manifestó a favor del dictamen en discusión, y adujo que en el transitorio se menciona que surtirá efectos a partir del día 02 de abril del año en curso, y que tres días antes sea publicado; sin embargo, respecto a la publicación, sugiere que el trámite sea de inmediato, propuesta que fue aceptada y, al no haberse reservado artículos del mismo para su discusión en forma individual, se recabó la votación nominal del documento en lo general y en lo particular, en los términos propuestos por el Diputado Rueda Sánchez,

resultando aprobado con 22votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. La votación fue de la siguiente manera: Diputado Vladimir Parra Barragán, por la afirmativa; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, por la afirmativa; Diputado Arturo García Arias, a favor; Diputada Araceli García Muro por la afirmativa; Diputado Guillermo Toscano Reyes, a favor; Diputado Julio Anguiano Urbina, a favor; Diputada Jazmín García Ramírez, a favor; Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a favor; Diputada Ana María Sánchez Landa; a favor; Diputado Francisco Javier Rodríguez García, a favor; Diputado Luis Fernando Antero Valle; a favor; Diputada María Guadalupe Berver Corona, a favor; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, a favor; Diputada Lizet Rodríguez Soriano, a favor; Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por la afirmativa; Diputada Rosalva Farías Larios, por la afirmativa; Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, a favor; Diputada Gretel Culin Jaime, a favor; Diputada Ana Karen Hernández Aceves, a favor; Diputada Martha Alicia Meza Oregón, por la afirmativa; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, por la afirmativa; Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, por la afirmativa.

6. En el punto relativo a asuntos generales, no se registraron participaciones.

7. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, se citó a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 04 cuatro de abril del año que transcurre, a partir de las 10:00 diez horas.

8. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura, por lo que, siendo las 13:01 trece horas con un minuto del día 01 primero de abril de 2019 dos mil diecinueve, se declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 01uno.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, quien actuó con las Diputadas Martha Alicia Meza Oregón y Alma Lizeth Anaya Mejía, Secretarias que autorizan y dan fe.

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ

PRESIDENTA

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN **DIP. MARIA GUADALUPE BERVER CORONA**

SECRETARIA SECRETARIA

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.

DIP. SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. En virtud de que la síntesis de comunicaciones ya fue enviada previamente por medio electrónico a los Diputados, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la asamblea la propuesta de obviar su lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Se pone a la consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.

DIP. SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría de los presentes.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pregunta si ¿alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones?

SESIÓN No. 2, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES

Comunicaciones de legisladores y comisiones del H. Congreso

No se presentaron.

Comunicaciones oficiales

1. Oficio número 0015/2019, de fecha 1 de abril de 2019, suscrito por Saúl Saucedo Ricardo, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Colima, a través del cual refrenda la petición hecha por el H. Ayuntamiento de Minatitlán, mediante oficio No. S.M.022/2019, de fecha 11 de marzo de 2019, para la emisión de un decreto de condonación de multas y recargos en el consumo de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, e Impuesto Predial, para el año 2019 y anteriores, por los meses de abril, mayo y junio. **Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.**

2. Oficio número CAPAC/075/2019, de fecha 29 de marzo de 2019, suscrito por el L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General y Representante Legal de la Comisión de Agua, Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, mediante el cual, en relación con el oficio SHA/007/03/19 -por el que se solicitó la aprobación de un decreto para descuentos en multas y recargos de este año y anteriores en el pago del impuesto predial, agua potable y alcantarillado de dicho municipio-, el organismo operador manifiesta que no hay impacto presupuestario negativo acorde con la política de recaudación, por lo que están de acuerdo en que se apruebe lo solicitado. **Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.**

3. Oficio número 225/2019, de fecha 01 de abril de 2019, suscrito por el C. Salvador Bueno Arceo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero de 2019.**Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.**

Solicitudes o comunicaciones de particulares

No se presentaron.

Solicitudes de licencia y toma de protesta

No se presentaron.

Minutas

No se presentaron.

Iniciativas de ley o decreto

1. Oficio s/n, por el cual se presenta la iniciativa suscrita por la Diputada Martha Alicia Meza Oregón y los Diputados Miguel Ángel Sánchez Verduzco y Luis Fernando Escamilla Velazco, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentada en la Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor el 1 de abril de 2019, por la que se propone otorgar: a) un subsidio del 50% en la expedición o renovación de licencias para manejar de motociclistas; b) un subsidio del 50% en la dotación de placas de circulación de motocicletas, incluyendo tarjetas de circulación; y c) un subsidio del 50% en la expedición de placas de circulación provisionales para motocicletas o equivalentes; beneficios que tendrían vigencia durante el mes de abril de 2019. **Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.**

2. Oficio No. SGG.CEQ.076/2019, de fecha 29 de marzo de 2019, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por medio del cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal, relativa a expedir la Ley que Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Colima y de sus Municipios; así como para adicionar al Título Primero de la Sección Tercera del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Colima un Capítulo VII Bis, integrado por los artículos 239 Bis, 239 Bis 1, 239 Bis 2 y 239 Bis 3.**Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.**

3. Oficio número SGG.CEQ.078/2019, de fecha 1 de abril de 2019, suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por medio del cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima.**Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.**

Propuestas de punto de acuerdo

1. Oficio número 263-6/19 II P.O. ALJ-PLeg, de fecha 12 de marzo de 2019, enviada por la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de Chihuahua, por medio del cual remite, para conocimiento y adhesión, en su caso, copia del acuerdo No. LXVI/URGEN/0141/2019 II P.O., por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaria de Bienestar y el Instituto Nacional de las Mujeres, para que reconsideren y reivindiquen la perspectiva de género y la protección efectiva de los derechos de las mujeres y la infancia, dada la desaparición del programa de estancias infantiles, las modificaciones a las reglas de operación de programas federales dirigidos a las mujeres, como el caso de refugios para atender a víctimas de

violencia extrema y el programa Prospera, que combatía la alta deserción escolar en mujeres, lo que las deja en un alto grado de vulnerabilidad y representa un retroceso. **Se toma nota y se archiva.**

ATENTAMENTE.

COLIMA, COL., 04 DE ABRIL DE 2019.

LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ

PRESIDENTA

DIP. MARIA GUADALUPE BERVER CORONA

SECRETARIA

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN

SECRETARIA

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Conforme al siguiente punto del orden del día se procederá dar lectura del dictamen con proyecto de Decreto elaborado conjuntamente por las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Justicia, Gobernación y Poderes, por el que se propone reformar el inciso e) de la fracción I del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias.

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Con el permiso de la Directiva, con el permiso de quien hoy nos acompañan. Compañeras y compañeros Diputados. A las y los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y Poderes, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la actual legislatura, por la que se

propone reformar el inciso e), de la fracción I, del artículo 47, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 17 de enero de 2019, la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, del Partido de Morena de esta LIX Legislatura, presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el inciso e) de la fracción I, del artículo 47, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima.

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 48, fracción I y 53, fracción III, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0196/2019, del 17 de enero de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto número 1 del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia, Gobernación y Poderes.

3.- La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes y a quienes conforman la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, a reunión de trabajo a celebrarse a las 11:30 del martes 02 de abril de 2019, en la Sala Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del H. Congreso del Estado, en la que se analizó la Iniciativa descritas en el punto 1 de este apartado de Antecedentes.

4.- Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

I.-La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, del Grupo Parlamentario de MORENA de esta LIX Legislatura, presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar el inciso e) de la fracción I,

del artículo 47, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone:

El Ayuntamiento es el órgano máximo de gobierno en el Municipio, a través del cual el pueblo realiza su voluntad política y la autogestión de los intereses de la comunidad. Es el Cabildo el órgano que se integra por un Presidente Municipal, Síndico y Regidores, que funcionan de manera colegiada tomando las decisiones en beneficio de la colectividad.

Como máxima autoridad en el Municipio, el Cabildo de forma colegiada, determina conforme a la Ley del Municipio Libre del Estado; su duración y las facultades y obligaciones que tienen los integrantes del mismo Cabildo ante los ciudadanos por ser el primer nivel de gobierno cercano a la ciudadanía.

Con ello tenemos que el Presidente Municipal, es la persona que ejecuta las determinaciones y acuerdos que tome el Cabildo, así como también es el responsable de la administración pública municipal y vecinal. Así, al expresar de las determinaciones y acuerdos que ejerce el Cabildo, es hablar de aquellos actos de autoridad que practican en favor del municipio que representan, pero siempre tomándolos en beneficio de la ciudadanía, nunca en contra de ésta, pues a ellos se deben.

Entendemos pues que son actos de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable de un órgano colegiado de gobierno, consistente en una decisión o en una ejecución, o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se imponga de forma imperativa a la ciudadanía.

En este contexto, al ejercer un estudio analítico y comparativo de la Ley del Municipio Libre de nuestra entidad federativa con otras leyes municipales de otros estados de la República, nos encontramos algunas lagunas en la ley misma, que no quedan muy bien explicadas del actuar de los ediles

dentro del apartado de las facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales, en cuanto a la remoción de funcionarios municipales como el acto de autoridad que se ejerce en beneficio de los gobernados del municipio.

Debiendo recordar que los actos de autoridad que deben ejercer las autoridades de los tres órdenes de gobierno, se encuentran consagradas dentro del artículo 16 de nuestra Carta Magna que a la letra dice:

> *"Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento" …*

Por lo que, conforme a las garantías de legalidad y seguridad jurídica que rigen a nuestro sistema jurídico, los actos de autoridad competente para ello, deben emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose el carácter en que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al particular en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si éste es o no conforme a la ley que le resulta aplicable, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la oportunidad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma o resolución que invoque.

La reforma que se propone a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, la presenta la suscrita con el objeto de que ningún Alcalde con su respectivo Cabildo, ejerza el despido de los funcionarios señalados en el artículo 47, fracción I, inciso e), sin fundar y motivar la remoción misma, pues si bien es cierto que el numeral 45, fracción I, inciso j) de la Ley en

comento, les otorga la facultad a los Alcaldes de los diez municipios de proponer a sus respectivos Cabildos los nombramientos del Secretario, Tesorero, Oficial Mayor, Contralor Municipal, Juez Cívico y del Titular del área de Seguridad Pública, cumpliendo con los requisitos señalados en la Ley Estatal del Sistema de Seguridad Publica; también es cierto que en el numeral 47, fracción I, inciso e), de la ley que se señala, no se establece dentro de la justificación de la remoción de los funcionarios municipales señalados en líneas atrás, el que se fundamente y motive legalmente; pues los Ediles y sus Cabildos deben ejercer los actos de autoridad con precisión, sobre el precepto legal aplicable del caso y se debe motivar legalmente, señalando claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los razonamientos a los que llevan a ejercer el acto mismo por parte de la autoridad municipal para la remoción de los funcionarios municipales señalados en el artículo en comento.

II.- Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por la fracción I, del artículo 48 y la fracción III, del artículo 53, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas Comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre el municipio y su estructura.

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa, coinciden en la esencia en el contenido de las propuestas de reforma que expone

la iniciadora, máxime, porque se busca la privilegiar el buen funcionamiento de las autoridades municipales y, en consecuencia, la mejora en la prestación de los servicios que por ley le corresponden en favor de sus habitantes.

No obstante, lo anterior, resulta fundamental que estas Comisiones dictaminadoras analicen el alcance de la Iniciativa en estudio, puesto que se debe privilegiarse en todo momento la gobernabilidad municipal, al igual que los derechos de los habitantes en cada uno de los municipios del Estado, así como de los funcionarios que en ellos prestan sus servicios.

TERCERO.- Del análisis de la Iniciativa propuesta por la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la LIX Legislatura de este Congreso del Estado, se desprende que se busca evitar que los titulares de las Presidencias Municipales puedan tomar decisiones arbitrarias y alejadas de las garantías jurídicas constitucionales respecto de la permanencia de los principales funcionarios públicos de las administraciones municipales, esto es, que se les remuevan sin que se les garanticen sus derechos y además, que ello sean en detrimento del mismo municipio y de sus habitantes.

De igual forma, se propone que, así como el Cabildo interviene en la designación de quien deba ocuparla Secretaría, Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría Municipal, Juzgado Cívico y latitularidad del área de Seguridad Pública, de igual manera intervenga en la separación de los mismos, dado que actualmente, la remoción es una facultad exclusiva de la Presidencia Municipal y hasta que justifique su decisión, esto es, constituye una decisión unilateral sin mayor condición legal.

En este sentido, es que la iniciadora propone de manera concreta dos condiciones novedosas respecto de la separación del cargo de los funcionarios públicos antes citados y sobre los que recaen las mayores responsabilidades administrativas y operativas en los municipios:

a) Que en la remoción del quien ocupe la *Secretaría, Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría Municipal, Juzgado Cívico y la titularidad del área de*

Seguridad Pública, sea propuesta de la Presidencia Municipal y deba pasar por la aprobación del Cabildo respectivo.

b) Que la remoción de los citados funcionarios públicos, se realice de manera fundada y motivada.

CUARTO.- En este orden de ideas, debe decirse que las Comisiones que dictaminan, si bien coinciden con la esencia de la Iniciativa que se estudia, tal y como ya se señaló en supra líneas, también es cierto, que debe considerarse de manera muy particular cual es el motivo por el cual, actualmente la Ley del Municipio Libre del Estado, le permite a la Presidencia Municipal proponer los nombramientos para la titularidad de los cargos de Secretaría, Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría Municipal, Juzgado Cívico y del área de Seguridad Pública,y al Cabildo su aprobación, por tanto la remoción como facultad exclusiva de la Presidencia Municipal.

En primer término, la facultad para proponer los nombramientos antes señalados a favor de la Presidencia Municipal, es con motivo de que dichos cargos son los más importantes dentro de la estructura orgánica municipal y sus titulares deben ser personas debidamente preparadas y con experiencia en la materia de cada una, así como de la absoluta confianza de quien preside el Ayuntamiento, en su calidad de ejecutor de las determinaciones del propio Cabildo.

Lo anterior, implica que una vez que el Cabildo ha tomado una decisión mediante un instrumento o figura que la ley prevea, la Presidencia Municipal con su equipo de colaboradores deberá atender dicha determinación y darle cause dentro del margen legal y siempre en beneficio de los habitantes de su demarcación territorial, de ahí, que quien preside el Ayuntamiento habrá de promover a los cargos antes mencionados a personas que por su perfil académico, su experiencia profesional y demás capacidades y aptitudes puedan dar los mejores resultados, condiciones y elementos que el Cabildo debe valorar y analizar al momento de que le son puestos a su consideración los mencionados nombramientos.

Es en ese preciso momento, en que el Cabildo tiene la oportunidad de hacer una valoración exhaustiva de los perfiles que le son presentados y después de ello, tomar una decisión respecto de otorgar el voto de confianza o negarle la aprobación a la propuesta del planteada por quien ocupe la Presidencia Municipal.

Una vez que el Cabildo le ha aprobado a quien preside el Ayuntamiento la titularidad de los nombramientos propuestos, el trabajo que realicen las personas favorecidas por la confianza del cuerpo edilicio estará bajo la supervisión y vigilancia, en primer término, de la propia Presidencia Municipal, y por supuesto, de quienes integran el cuerpo colegiado constituido como la máxima autoridad en el municipio.

Es en ese instante, en el que se da paso al segundo aspecto que debe analizarse con motivo del estudio de la Iniciativa que nos ocupa, el relativo a la remoción de quienes ocupen los cargos en cita, es una facultad exclusiva del titular del Ayuntamiento.

En ese tenor, esta disposición vigente tiene su génesis precisamente en las funciones que por mandato legal tiene la Presidencia Municipal, siendo trascendental, la relativa a la ejecución de las determinaciones del máximo órgano de gobierno de los municipios, el Cabildo; por virtud de esta función primordial, quien preside un Ayuntamiento es el primer responsable de la buena marcha administrativa de la autoridad municipal en su conjunto, es el principal responsable del ejercicio del erario público y de su encausamiento a la prestación de los servicios públicos que en virtud de las competencias constitucionales y legales deben brindarse por el municipio, consecuentemente, es quien supervisa, valora y analiza el desempeño y los resultados que obtiene de quienes ocupan la titularidad de la Secretaría, Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría Municipal, Juzgado Cívico y del área de Seguridad Pública, pudiendo así, tomar eventualmente la decisión de remover a quienes no cumplan con su función o no briden los resultados que se requieran para el buen despacho de los asuntos y la prestación de los servicios públicos.

Por lo anterior, se considera que al retirarle la facultad exclusiva a la Presidencia Municipal de remover a sus principales funcionarios para compartirla con el Cabildo, implicaría que a la parte ejecutiva de los Ayuntamientos se le restará capacidad para promover la ejecución y eficacia en las funciones administrativas de los entes municipales, lo que pudiera generar alguna consecuencia negativa en la buena marcha de las obligaciones y servicios que se tienen para con la población de sus demarcaciones territoriales respectivas.

QUINTO.-El otro aspecto que debe analizarse, es el relativo a que la remoción de los citados funcionarios públicos, se realice de manera fundada y motivada, esto es, que no se realice de manera arbitraria, sin una causa y que esa casusa se apegue a algún precepto legal.

Lo anterior, es fundamental en virtud de que los actos arbitrarios de cualquier tipo de autoridad, ocasionan afectaciones a las esferas jurídicas de sus destinatarios y en el caso concreto que plantea la iniciativa en estudio, se pudiera afectar los derechos humanos de acceso al trabajo digno y a ocupar cargos públicos, el primero de ellos, fundamental para la subsistencia humana y el segundo, vital para el desarrollo personal y profesional de quienes pretenden ejercerlo.

En este aspecto de la iniciativa que nos ocupa, las Comisiones que dictaminan coinciden plenamente, puesto que debe ser un imperativo que todo actuar de la Presidencia Municipal se encuentre una motivación y que la misma se sustente en la ley aplicable al caso concreto.

Dicho de otra manera, la certidumbre jurídica de los actos de autoridad debe ser una constante en todos los entes públicos, a lo cual, no debe escapar la facultad exclusiva de la Presidencia Municipal al momento de remover a las personas que ocupen los multicitados cargos públicos.

SEXTO.- Con base en lo anterior, las Comisiones que dictaminan, coinciden en la necesidad realizar algunas modificaciones en el contenido de la iniciativa que nos ocupa, con el fin de que aprobar una reforma que evite la vulneración de derechos humanos de quienes ocupan los cargos de la Secretaría, Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría Municipal, Juzgado Cívico y del área de Seguridad Pública en

los municipios, lo cual se lleva a cabo en los términos siguientes y con fundamento en el artículo 130, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Luego entonces, estas Comisiones dictaminadoras concluyen como un aspecto positivo que los actos de remoción de las personas titulares de la Secretaría, Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría Municipal, Juzgado Cívico y del área de Seguridad Pública, deban emitirse de manera fundada y motivada, máxime que por disposición constitucional todo acto de autoridad debe contar con tales elementos mínimos de legalidad.

En esa tesitura, estas Comisiones determinan que la remoción de las personas que ocupan los cargos antes mencionados, debe seguir como una facultad exclusiva de la Presidencia Municipal, con la garantía para quienes ocupan esas posiciones, de que se funde y motive la decisión de la separación del cargo.

Finalmente, estas Comisiones dictaminadoras coinciden que las distintas reglamentaciones municipales aplicables al caso, también deben ser sujetas de adecuación a lo expuesto en el presente instrumento, por lo que consideran oportuno establecer en un artículo transitorio un plazo prudente de 60 días naturales para tal efecto.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO.-Es de aprobarse y se aprueba reformar el inciso e), de la fracción I, del artículo 47, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar como sigue:

“ARTICULO 47.-…

I. …

a) a d)…

e) Proponer al Cabildo los nombramientos del secretario, tesorero, oficial mayor, contralor municipal, juez cívico y al titular del área de seguridad pública; así como removerlos en caso justificado, **fundando y motivando la decisión;**

III a VII. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- Dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, los Ayuntamientos de la Entidad, deberán adecuar sus reglamentos internos de conformidad con lo que en el mismo se dispone.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Las Comisiones que suscriben, solicitan que de ser aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente.

ATENTAMENTE
Colima, Col., 02 de abril de 2019

COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES

Dip. Carlos Cesar Farías Ramos
Presidente

Dip. Araceli García Muro
Secretaria

Dip. Ana Karen Hernández Aceves
Secretaria

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Dip. Arturo García Arias
Presidente

Dip. Rogelio Rueda Sánchez
Secretario

Dip. Guillermo Toscano Reyes
Secretario

Dip. Vladimir Parra Barragán
Vocal

Dip. Carlos Cesar Farías Ramos
Vocal

Es cuánto Diputada Presidenta.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 132 y 136 fracción VI y VII de su Reglamento, se pregunta a las y los compañeros Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad de los presentes.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso a) del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la Diputada o el Diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo

particular y en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación, en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaria que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIP. SRIA. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la negativa.

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, a favor.

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. Arturo García Arias, a favor.

DIP. ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García, a favor.

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la afirmativa.

DIPUTADA JAZMIN GARCIA. Jazmín García, a favor.

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, a favor.

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Sánchez Landa, por la afirmativa.

DIPUTADO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Carlos Farías, a favor.

DIPUTADO LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ. Rogelio Salinas, a favor.

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor.

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Cúlin, a favor.

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor.

DIPUTADO LISET RODRÍGUEZ. Rodríguez Soriano Lizet, a favor.

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Remedios Olivera, por la afirmativa.

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por la afirmativa.

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la afirmativa.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún Diputado por votar?, **¿**Falta algún Diputado por votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva. Martha Meza, por la afirmativa.

DIP. SRIA. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, a favor.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Anel Bueno, por la afirmativa.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos, el documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, se le concederá el uso de la palabra, en el orden que hayan registrado sus participaciones ante esta Mesa Directiva. Se concede el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco.

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Muchas gracias Presidenta. Saludos Secretarias, compañeras Diputadas, compañeros Diputados, personas que nos acompañan. Este es un tema que tiene muchos años y que mas que tener sugerencias por la unión europea, yo creo que nosotros mismos nos hemos dado cuenta que necesitamos cambiar, modificar o sugerir, exhortar al gobierno federal, que nos apoye con esta. Los Diputados, el de la Voz, Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Diputada Martha Meza, Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco del Partido Verde Ecologista de México, de esta Legislatura del

Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa que se propone elevar al Congreso de la Unión, abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre del año 2001 (dos mil uno).

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Diputado me permite tantito.

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Adelante Presidenta

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito amablemente a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura, para seguir con el desarrollo de la presente Sesión, gracias.

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Publicado en el Periódico Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre del año 2001 (dos mil uno), por el que se expide la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con la última reforma de fecha 31 (treinta y uno) de enero del año 2015, con base en la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

En el sexenio del LIC. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 04 (cuatro) de enero del año 1996 (mil novecientos noventa y seis), fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el

decreto por el que se establecen horarios estacionales en los Estados Unidos Mexicanos.

La Consideraciones establecidas el dicho decreto, señalan en ese entonces que:

a) La parte continental del territorio nacional se encuentra ubicada entre los meridianos 86º y 118º al oeste del Meridiano de Greenwich, por lo que le corresponden los husos horarios que tienen como referencia los meridianos 90º, 105º y 120º;

b) Mediante diversos Decretos Presidenciales se han establecido horarios diferentes en función de las necesidades de las regiones geográficas del país y que, en la actualidad, en la mayor parte del territorio nacional se aplica la hora del meridiano 90º; en los Estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora la hora del meridiano 105º, y en Baja California, rige el sistema de horarios estacionales, correspondiendo la hora del meridiano 105º durante el verano y la del meridiano 120º para el resto del año;

c) El llamado "horario de verano" es una medida que se aplica durante el período de mayor insolación durante el año y consiste en adelantar una hora el horario local al inicio de dicho período, y retrocederlo, también una hora, una vez transcurrido el período citado;

d) El horario de verano propiciará una importante disminución en la demanda de energía eléctrica, así como una reducción en el consumo de los combustibles utilizados para su generación, lo cual, a su vez, contribuirá a disminuir la emisión de contaminantes;

e) Es compromiso del Gobierno de la República apoyar las actividades productivas del país, a partir de los costos de producción y proteger el

ingreso familiar, y que un menor consumo de energía eléctrica coadyuvará a lograr tales objetivos;

f) Con el horario de verano, la sociedad en su conjunto realizará un mayor número de actividades a la luz del día, lo que puede reanudar en mayores condiciones de seguridad pública, y

g) Los estudios realizados por diversos organismos especializados del Gobierno Federal y la experiencia en numerosos países que aplican los horarios estacionales, dan cuenta de los beneficios económicos y sociales que esta medida implica y, en tal virtud, diversos sectores sociales han solicitado se adopten medidas similares en nuestro país.

Así pues, el decreto en comento fue modificado y abrogado en diversas ocasiones como lo son: mediante decreto del 13 de agosto de 1997. (Poder Ejecutivo Federal), decreto del 31 de julio de 1998. (Poder Ejecutivo Federal), decreto del 29 de marzo de 1999. (Poder Ejecutivo Federal), Decreto del 1 de febrero de 2001. (Poder Ejecutivo Federal), decreto del 06 de enero de 2010 (Poder Ejecutivo Federal), y decreto que expide la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de diciembre del 2001, y con la última reforma de fecha 31de enero de 2015.

En nuestro país el horario de verano comenzó a aplicarse de forma regular y continua para toda la nación, en el año 1996, inicialmente con el propósito de empatar la hora entre Estados Unidos y México.

El objetivo principal de la implementación del Horario de Verano fue ahorrar energía eléctrica haciendo un mejor uso de la luz natural, durante los meses de verano.

El Horario de Verano consiste adelantar una hora los relojes para modificar la hora de encendido de la luz.

Cabe destacar qué México experimentó con un horario de verano de solamente cinco meses en 2001, del primer domingo de mayo hasta el último domingo de septiembre. Sin embargo, al año siguiente, en 2002, regresó al horario de verano de siete meses. Como el entonces Distrito Federal y varios estados sureños decidieron seguir con el horario de verano de sólo cinco meses para 2002, el Congreso Mexicano dictaminó que ésta es una decisión federal; y por lo tanto ningún estado podía combatir su horario en forma individual. Esta decisión fue contraproducente en el 2007, pues bajo la presión constante de los Diputados Sureños, el Congreso Mexicano se ha negado sistemáticamente a cambiar el horario de verano, no habiendo realizado cambio alguno en 2007 y prefiriendo establecer en 2010 dos horarios de verano en el mismo país (algo único en el mundo) con la confusión que ello genera.

Sin embargo la implementación del horario de verano en nuestra entidad Federativa no resulta fructífero, pues más que benéfico resulta contraproducente para nuestros ciudadanos quienes se ven afectados al consumir más energía eléctrica, aquejando con ello considerablemente la economía del núcleo familiar, sumándose para ello el descontento y rechazo ante tal imposición, ya que año tras año tenemos que efectuar el cambio y por ende el inmediato uso y aplicación, lo que provoca trastornos biológicos, económicos, modificación del ritmo de vida y actividades sujetas a la combinación de horarios y tiempos de luz natural.

Recordando que las condiciones geográficas de nuestro país, ubicado a 19º latitud norte, la variación de luz solar entre los días de invierno y los de verano es de solo dos horas y veinte minutos, por lo que al adelantar una hora nuestro reloj no es determinante para el ahorro del consumo energético, ya que muy temprano, por la mañana es necesario encender la luz artificial, vislumbrándose que más allá de

ahorrar energía con la implementación del horario de verano, resulta más consumo en energía eléctrica.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Legislatura del Estado de Colima recoger esta iniciativa, hacerla nuestra y elevarla al Congreso de la Unión a efecto abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre del año 2001 (dos mil uno), por el que se expide la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con la última reforma de fecha 31 de enero del 2015.

Por lo antes expuesto y fundado, sostenemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de:

D E C R E T O

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba hacer uso de las atribuciones previstas en la fracción III del artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de remitir al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, por medio del cual se propone abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación con fecha 29 de diciembre del año 2001 (dos mil uno),por el que se expide la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con la última reforma de fecha 31 de enero del 2015, para quedar como sigue:

LEY DEL SISTEMA DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 1.- SE ABROGA

ARTICULO 2.- SE ABROGA

ARTICULO 3.- SE ABROGA

ARTICULO 4.- SE ABROGA

ARTICULO 5.- SE ABROGA

ARTICULO 6.- SE ABROGA

ARTICULO 7.- SE ABROGA

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. - SE ABROGA

SEGUNDO. - SE ABROGA

TERCERO. - SE ABROGA

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor a partir del 1° de enero de 2020, debiéndose publicar en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los que suscribimos la presente iniciativa solicitamos que la misma se someta a discusión y votación, en su caso, dispensándose de todo trámite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124, 137 y 138 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, ya que, como ha quedado expresado en el cuerpo de la iniciativa, se trata de un asunto de notoria urgencia y obvia

resolución. Sí, en cuanto al Transitorio corregir que entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación.

A T E N T A M E N T E
Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco

Dip. Luís Fernando Escamilla Velasco **Dip. Martha Alicia Meza Oregón**

Es cuánto Presidenta.

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Diputados, en virtud de la petición hecha por el Diputado Miguel Ángel a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y por las razones antes expuestas, se somete a consideración de esta Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría.

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacer uso de la voz. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIP. SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Por la negativa.

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Vladimir Parra, a favor.

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS. García Arias, a favor.

DIP. ARACELI GARCÍA MURO. Araceli García Muro, a favor.

DIPUTADA JAZMIN GARCIA. Diputada Jazmín García, a favor.

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Ana Landa, por la afirmativa.

DIPUTADO CARLOS CESAR FARÍAS RAMOS. Carlos Farías, a favor.

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA, Rodríguez, a favor.

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Guillermo Toscano, por la afirmativa.

DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Gretel Culin, a favor.

DIPUTADO LISET RODRÍGUEZ. Rodríguez Soriano Lizet, a favor.

DIPUTADA ROSALVA FARIAS LARIOS. Rosalva Farías, por la afirmativa.

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Fernando Escamilla, por la afirmativa.

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Miguel Ángel, por la afirmativa.

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Rogelio Rueda, a favor.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún Diputado por votar?

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Claudia Aguirre, por la afirmativa.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a votar la Mesa Directiva. Martha Meza, por la afirmativa.

DIP. SECRETARIA MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA. Berver Corona, por la afirmativa.

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Ma. Remedios Olivera, por la afirmativa

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 18 votos a favor del documento que nos ocupa.

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por mayoría, el documento que nos ocupa, con 18 votos. Instruyo a la Secretaría se dé el trámite correspondiente. Tiene el uso de la voz la Diputada Araceli García Muro.

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenos días, con su permiso Presidenta. Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. Nos da mucho gusto que este aquí la Fundación de Autismo TATO, su Presidenta, sus integrantes, maestros, y alumnos de esta Fundación. Bienvenidos, esta es su casa, la casa del pueblo. Muchas gracias. La suscrita Diputada Araceli García Muro, y las y los Diputados integrantes del grupo parlamentario de MORENA, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 83 fracción I, y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea**,** una Iniciativa de Punto de Acuerdo de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El trastorno del espectro del autismo es un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando

lugar a dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta.

En la actualidad, no está determinada la causa que explique la aparición del Autismo, pero sí la fuerte implicación genética en su origen.

El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de comprensión produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y las comunidades.

La estigmatización y la discriminación asociadas a la diversidad en el ámbito neurológico siguen siendo los principales obstáculos para el diagnóstico y el tratamiento.

El sistema de las Naciones Unidas ha celebrado la diversidad a lo largo de toda su historia y ha promovido los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, incluidos los niños con diferencias en el aprendizaje y discapacidad del desarrollo.

Desde el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 2 de abril como el Día Mundial del Autismo, por lo que como poder legislativo debemos reafirmar nuestro compromiso con esos valores, que incluyen la igualdad, la equidad y la inclusión, y nuestra determinación de promover la plena participación de todas las personas con autismo, asegurándonos de que dispongan de las herramientas necesarias para ejercer sus derechos y libertades fundamentales.

En 2008, entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que reafirmó el principio fundamental de los derechos humanos universales para todos. El propósito de la Convención es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Se trata de una herramienta infalible para fomentar una sociedad inclusiva que cuide a todos sus miembros y garantizar que todos los niños y adultos con autismo puedan llevar una vida plena y gratificante.

En este orden de ideas, el color azul es un protagonista en este trastorno, debido a que el azul representa el color del mar, a veces tranquilo y sereno y otras veces tan tormentoso. Esta simbología está muy ligada a lo que viven los familiares de una persona autista. Un niño autista no se aísla porque quiere, necesita el apoyo de los demás.

En este contexto existe una iniciativa denominada “Light It Up Blue” (ilumínalo de azul) misma que consiste en iluminar de color azul diferentes edificios emblemáticos y monumentos históricos alrededor del mundo, promovida desde el 2010 por AutismSpeaks, organización dedicada a crear conciencia y recaudar fondos para la investigación cobre el autismo.

En el año 2016, 157 países de los 7 continentes iluminaron de azul diversos edificios y monumentos emblemáticos como el EmpireState en Estados Unidos, el Cristo del Corcovado en Brasil, las Cataratas del Niágara en Canadá, la Ópera de Sídney en Australia, las Pirámides de Egipto, por mencionar algunos.

En nuestro México, comprometido con la causa, no se ha quedado atrás, puesto que, ha iluminado el Senado de la República, el Castillo de Chapultepec, el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución entre varios monumentos y edificios en la Ciudad de México y otros Estados de la República.

Es en ese tenor propongo este punto de acuerdo, para que el mes de abril sea el mes azul, y esta Quincuagésima Novena Legislatura se sume para lograr hacer que este 2019, se haga la mayor campaña de concientización acerca del Espectro Autista. Iluminemos esta Soberanía de Color Azul y hagamos “hashtags” #IluminemosDeAzul y #ColimaPorElAutismo.

Concluyo diciendo que el autismo no es una tragedia, la tragedia es la ignorancia, y se bien lo especial que guarda un abrazo de un niño autista, pues sé que tiene un tesoro especial que debemos de cuidar.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el Orden Constitucional y Legal vigente sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

A C U E R D O

PRIMERO. - Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a las y los Presidentes de los diez Ayuntamientos del Estado, reforzar el fomento de campaña y políticas permanentes de inclusión y concientización del autismo, promoviendo que el mes de abril de cada año, sea considerado el “mes azul” e iluminen sus edificios de este color.

SEGUNDO. –Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a la Presidenta y Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, para que en el ámbito de su respectiva competencia promueva dentro de las instalaciones durante el mes de abril de cada año, “mes azul”, campañas de inclusión y concientización del autismo, así como se ilumine esta Soberanía de color azul.

TERCERO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes.

Las y los suscritos Diputados, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación. Es cuánto, muchas gracias.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Muchas gracias compañera Diputada. Con fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó la compañera Diputada Araceli García, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el

diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que los ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica, si es aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la compañera Diputada Araceli. Instruyo a la secretaria le dé el trámite correspondiente. En el siguiente orden del día le concedemos el uso de la voz al Diputado Rogelio Rueda.

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la Presidencia, procuraré ser muy breve, porque tenemos varios temas en asuntos generales. El Punto de Acuerdo que estoy proponiendo a consideración del pleno, es muy sencillo. Todos tenemos presentes, sabemos que cada año con motivo de la semana santa y pascua que significa una presencia de miles y miles de visitantes, turistas, familiares, etcétera, se monta un operativo por las autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil, conjuntamente con los sistemas municipales, para cuidar los riesgos que se generan con tanta afluencia de visitantes. Tanto en las carreteras, como en los balnearios, en los distintos puntos de concentración de mucho tránsito o de muchas personas. Eso se hace cada año, y participan todas las dependencias, los tres órdenes de gobierno, incluso, asociaciones civiles, particulares, en fin, el planteamiento simplemente consiste en exhortar al Ejecutivo a que, en esta ocasión, al armar el operativo, y al definir las responsabilidades que cada quien asume, puedan poner por escrito, los compromisos que cada quien asume, sea una dependencia municipal, estatal, federal, una asociación civil, en fin, que tengamos registrado eso por escrito y pedir, que una vez que concluya el operativo, nos puedan presentar un informe de ¿Quién cumplió? y ¿En qué condiciones cumplió el compromiso que asumió? Porque lo que queremos es que no ocurra cada año que se hacen compromisos y

luego no se cumplen, y no pasa nada. Lo menos que debería de pasar es que ya no se le invite, porque si no va a cumplir y solamente va para tomarse la foto pues no tiene sentido que le estemos invitando. Entonces, no estamos tratando de hacer quedar mal a nadie, simplemente que registremos a que se compromete cada quien, que nos lo puedan compartir y que una vez que termine el operativo, nos puedan compartir ¿Quién si cumplió, quien no cumplió y quien cumplió a medias?, para saber ¿Cuál es la forma en que se están llevando estos operativos? Y poder en su caso, en sus instancias correspondientes de protección civil, tomar las medidas que convengan para precisamente, garantizar que los visitantes, familiares, turistas, tengan las mejores condiciones, para continuar visitando nuestro Estado y dejando, además, de la alegría de las visitas, pues también los recursos económicos que deja la actividad turística. Espero que puedan acompañar esta proposición del punto de acuerdo con el voto de cada uno de ustedes compañeros. Muchas gracias.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Previo a la votación del punto de acuerdo del Diputado Rogelio, con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 12 horas con 14 minutos, declaro un receso.....RECESO..... Siendo las 12 horas con 20 minutos, se reanuda la sesión. Se pone a la consideración de la Asamblea. Continuamos con la votación; con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de las Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el Diputado Rogelio Rueda Sánchez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito amablemente a los presentes y compañeros Diputados, guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con esta sesión. Gracias.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica, si es aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Rogelio Rueda. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden de asuntos generales, se le concede el uso de la voz al Diputado Vladimir Parra.

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Bien. En virtud de que existe un número elevado de participaciones en asuntos generales, me permito solamente hacer la presentación de la Iniciativa del suscrito a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA. Misma que ya fue enviada a todos ustedes por correo electrónico. Por lo que solicito, se tenga por reproducida mediante su inserción integra en el diario de los debates, a efecto de que sea turnada a comisiones para la dictaminación correspondiente. Esta iniciativa que elaboramos, esta, con reforma para el Poder Judicial, la hicimos con ayuda de Organizaciones, quiero mencionar al ANAD, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, sección Colima; al Concejo de Seguridad Ciudadano; y también al Presidente de la Comisión Anticorrupción del Estado de Colima; también a mis compañeros Guillermo Toscano y Araceli García Muro, que estuvieron en estas Mesas de Trabajo. DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN, y demás integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción I y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 123 de su Reglamento, tenemos a bien someter a la consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que aprueba la reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, **en materia de procedimiento de nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, así como duración del cargo, procedimiento**

de ratificación de los mismos, mecánica de elección de su Presidente y periodo de ejercicio de dicha representación, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Modificación al Proceso de designación de Magistrados.

Si queremos lograr paz social, frente al estado actual de violencia permanente, debemos disminuir los niveles de impunidad, con el fin de que se garanticen realmente los derechos humanos de los ciudadanos. Para ello, es vital fortalecer las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno en el Estado, en particular, del Poder Judicial, mediante la búsqueda de una verdadera autonomía.

Para lograrlo, es indispensable que los magistrados, como integrantes del máximo órgano del Poder Judicial, sean nombrados mediante procedimientos previamente establecidos, transparentes y públicos, que permitan garantizar que quienes lleguen a estos puestos, sean profesionistas que cumplan con los perfiles adecuados y que acrediten contar con la experiencia suficiente y una alta capacidad para poder ejercer el derecho como una herramienta para resolver los problemas cotidianos de la población. Debemos evitar para ello, que los titulares de estos encargos sigan siendo nombrados discrecionalmente y sin escrutinio público, para impedir que lleguen personas que respondan a intereses personales, como hasta ahora se ha venido haciendo.

Es, por tanto, de interés público, que la legislación local contemple los procedimientos para designar y evaluar a los magistrados, mediante reglas claras, que no dejen aperturas que puedan desvirtuar estos procedimientos. La función que estos servidores desempeñan, es de interés social, y por tanto, la población tiene el derecho colectivo a contar con un sistema de justicia que esté integrado por magistrados capaces, honestos, probos, técnicos en el conocimiento y aplicación del derecho, y sensibles a respetar los derechos humanos, que tengan perspectiva de género, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución Estatal, en la Constitución Federal y en los tratados internacionales que de los que

México es parte.

Dada la importancia de consolidar los sistemas judiciales locales, es necesario que los titulares de los poderes que intervengan en el procedimiento de designación de magistrados cuenten con un marco jurídico adecuado, que contemple los procedimientos de nombramiento y evaluación de la alta magistratura del poder judicial local, que regule rigurosamente los procedimientos, con el fin último de que se cumpla con la voluntad popular y no con intereses personales.

Por esa razón, es necesario, que la legislación en la materia se apegue a lo que establece la Constitución Federal en su artículo 16 fracción III y se respete el estándar internacional de los derechos humanos, específicamente los precedentes internacionales que obligan al Estado mexicano, así como, que se tomen en cuenta los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura internacional, en el diseño de dichos procedimientos.

Actualmente la legislación local no establece procedimientos abiertos ni transparentes para el nombramiento de magistrados o sobre la evaluación de su desempeño; sin embargo, diversas resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto han sugerido y ordenado que los poderes judiciales locales cuenten con estos mecanismos de ley. Por ello, ante la omisión legislativa que existe y debido a la trascendencia y necesidad de que existan estos procedimientos debidamente regulados en la Constitución y en la ley secundaria, es que, se solicita se lleve a cabo la reforma que nos ocupa.

Por otro lado, la falta de procedimientos en la Constitución y en la ley para la designación y evaluación a Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, no sólo ha contribuido a la violación de los derechos humanos de la ciudadanía y al desarrollo de la impunidad, sino también de los derechos de los propios integrantes del poder judicial estatal, quienes se ven impedidos para participar como aspirantes a estos encargos, sin importar su preparación, desempeño o antigüedad.

El método definido para la elección de magistrados actualmente en nuestra legislación, no cumple con los parámetros de regularidad constitucional, ni tampoco con los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que el ejecutivo del Estado, quien expide los nombramiento de magistrados, no emite una convocatoria abierta y pública para invitar de forma transparente, a todos aquellos interesados que consideren cumplir con los requisitos y perfiles, con igualdad de oportunidades.

En la presente iniciativa se toman en consideración los últimos razonamientos generados por el Poder Judicial de la Federación en torno al procedimiento de designación de los magistrados de los tribunales locales, en el caso particular de los que conforman el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y lo aplicable en el caso de la nulidad de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Por ello, se plantea la no intervención del Titular del Poder Ejecutivo, y se considera necesario que el procedimiento de designación de los magistrados comience en el seno del Poder Judicial, como un órgano garante de las necesidades que tiene ese propio Ente y la participación en la vigilancia que le garantice una verdadera autonomía, sin verse sujeto a presiones políticas.

Sin embargo, esto no debe entenderse como el obsequio de una facultad absoluta o soberana para aquél, sino que, en un ejercicio de voluntades, se propone la participación de este en conjunto con el Poder Legislativo, dado que este último representa, en mayor medida, la pluralidad de la población, lo que garantiza, una mayor discusión y debate en la toma de la decisión.

Lo anterior, sobre las bases de máxima publicidad, transparencia, idoneidad e igualdad, para que todos aquellos ciudadanos que deseen aspirar a ocupar el cargo de magistrado lo puedan hacer, previo cumplimiento de los requisitos constitucionales y de que se agoten las etapas de selección que se tienen previstas en la reforma que se propone.

Cobra relevancia que recientemente se ha declarado la inconstitucionalidad e

inconvencionalidad de artículos de nuestra Constitución Local por no ser acordes a la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, esto, con motivo del procedimiento de designación y aprobación de nombramientos de Magistrados del Tribunal de Justicia y Administrativa del Estado de Colima, lo anterior considerando que tales preceptos no desarrollan un procedimiento abierto que diera oportunidad a quienes aspiren a esos cargos, a participar en igualdad de condiciones en un proceso de selección abierto derivado de una convocatoria pública.

Asimismo, se plantea en esta iniciativa, la intervención de la sociedad civil, de las universidades y de los colegios o barras de abogados, para que puedan pronunciarse con respecto a los aspirantes que se registren en el procedimiento para nombramiento de magistrados, permitiendo con ello que el procedimiento pueda ser escrupulosamente vigilado por la ciudadanía, garantizando una mayor transparencia y pulcritud en el proceso.

Se establece también, que el procedimiento comience con la expedición de una convocatoria a la que se le deberá dar la máxima publicidad mediante diversos medios de comunicación, en donde se establezca puntualmente los procedimientos y plazos que deberán seguirse, así como los requisitos a cubrirse, en la participación de los aspirantes al nombramiento de los magistrados.

Asimismo, se establece que, tanto en la primera etapa efectuada a cargo del Poder Judicial, como en la segunda a cargo del Poder Legislativo, las decisiones se tomen en forma fundada y motivada, sobre bases y criterios objetivos y que las votaciones sean reforzadas, es decir, por las dos terceras partes de los integrantes tanto del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como de los integrantes del Congreso de Estado, lo que permitirá mayor análisis, legitimidad y equilibrio en la toma de decisiones por parte de dichos órganos.

Lo anterior resulta relevante puesto que, con esa mecánica de concurso y votación, permite que, en mayor medida, una persona que cumpla con dicho perfil y proceso, logrando el consenso de la mayoría calificada, garantice su capacidad,

experiencia y honradez, en su desempeño profesional.

Acorde con esta postura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado la implementación de concursos de oposición dentro del proceso de selección y nombramiento de funcionarios judiciales, para que de esta forma se permita evaluar objetivamente y calificar la capacidad profesional y los méritos de las candidatas y candidatos a los cargos.

2. Modificación al periodo de duración del cargo de jueces y Magistrados.

Actualmente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, en su artículo 20, se establece que el cargo de Magistrado tendrá una duración de seis años, contados a partir de su protesta del cargo; sin embargo, a la fecha en nuestra Constitución en el artículo 73 se enuncia que los magistrados y los jueces durarán seis años en el ejercicio de su encargo, y que dicho periodo se contará desde el día primero de noviembre en que se inicia el periodo constitucional del Ejecutivo.

En virtud de lo anterior, en la presente iniciativa se propone en primer lugar modificar el periodo de ejercicio del cargo de jueces y magistrados, con la finalidad de que el mismo sea de cinco años en lugar de seis, para que de esta manera los periodos sean por un lapso de tiempo establecido en números nones que genere condiciones que impidan que en la mayoría de las ocasiones dicho periodo de ejercicio del primer periodo del ejercicio del cargo, coincida con el del titular del ejecutivo del Estado. De esta manera se disuaden prácticas que se han venido dando en los últimos años, por una parte, de elegir discrecionalmente por el Titular del Ejecutivo, a magistrados a modo, que garanticen impunidad y complicidad durante todo su periodo.

Por otra parte, se pretende cambiar la redacción sobre la fecha a partir de la cual debe contarse el periodo de ejercicio de los magistrados, con el objetivo de que, se establezca con motivo de la presente iniciativa, que los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo cinco años contados a partir de su protesta del cargo, y

no desde el día primero de noviembre en que se inicia el período constitucional del Ejecutivo, corrigiendo con ello la contradicción en la legislación.

Lo anterior tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto en la tesis de jurisprudencia identificada como **P/J 109/2000**, al señalar que el periodo del ejercicio del cargo de los magistrados es de seis años y que dicho término se computará a partir de que entren en funciones, con independencia absoluta de las fechas en que inicie y concluya el sexenio del gobernador.

3. Modificación al Procedimiento de ratificación de Magistrados

Por otra parte, resulta de indispensable, que en la ley se encuentre establecido el procedimiento de evaluación que se requiere para la ratificación de magistrados, dado que esto implica la inamovilidad en el cargo de los magistrados, posterior a su ratificación y con el fin de respetar las garantías de los juzgadores.

Actualmente, conforme a nuestra legislación se encuentra regulada la aplicación de la ratificación tácita, es decir, que, frente a la omisión de las autoridades correspondientes sobre la ratificación de un magistrado, se entienda por ratificado a dicho servidor, lo que ha implicado en la realidad, el nulo análisis y evaluación del desempeño de estos servidores.

Por lo que se refiere a la ratificación de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en primer lugar, como se expuso, se propone reducir el primer periodo de ejercicio de seis a cinco años, para de esta manera contar con un periodo más breve en el que la persona designada como magistrado, pueda ser evaluada en el desempeño del ejercicio de dicho encargo, y brindarle a su vez la certeza de que efectivamente al final de ese periodo deberá, en forma expresa, emitirse un dictamen que proceda de una valoración objetiva, fundada y motivada, mediante un procedimiento transparente, público y garantizando la intervención de la sociedad.

Sobre este particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la

Jurisprudencia identificada con el número **111/2000,** señaló que en el Estado de Colima, los artículos 58, fracción X y 70 de la Constitución local otorgaban al Gobernador la facultad de expedir los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y someterlos para su aprobación al Congreso Local; sin embargo, la abstención del gobernador de realizar un dictamen de evaluación del desempeño en el cargo de un Magistrado, que fundara y motivara su proposición de ratificación o negativa de ésta en el cargo de una persona al término del periodo de seis años, daba lugar a la ratificación tácita del Magistrado en el cargo y, con ello, a que adquiriera la prerrogativa de la inamovilidad judicial, pues indicó la Corte, **tal abstención no podía ocasionar la afectación de derechos constitucionalmente establecidos para el funcionario y consagrados primordialmente en interés de la sociedad**, como lo es el relativo a la seguridad o estabilidad en el ejercicio del cargo como una de las formas de garantizar la independencia judicial.

Sobre este tema, inclusive la Corte expuso que esta regla excepcional de ratificación tácita podría propiciar favoreciera a una persona no idónea, pero ello, por una parte, no sería consecuencia del sistema, sino de la negligencia de no emitir el dictamen desfavorable respectivo por parte del órgano u órganos competentes.

En virtud de ello, con esta reforma se pretende eliminar la citada ratificación tácita de magistrados y en su lugar, establecer que para que pueda ratificarse a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, necesariamente deberá de emitirse expresamente un dictamen objetivo, fundado y motivado que así lo determine.

Aunado a lo anterior, y a efecto de materializar ese interés de la sociedad, es necesario someter a escrutinio público el actuar del servidor público en el ámbito de la administración de justicia y darle la intervención a la sociedad civil para que, en su caso, aporte aquellos elementos de prueba que trascienden y puedan afectar en el procedimiento de ratificación del cargo.

En virtud de lo anterior, se propone que los magistrados del Supremo Tribunal de

Justicia, a la entrada en vigor del presente decreto se encuentren desempeñando su primer periodo de ejercicio, queden sujetos al presente decreto, y sólo puedan ser ratificados si obra dictamen escrito y expreso, fundado y motivado, por parte del Congreso del Estado y conforme a las nuevas reglas que se proponen.

Finalmente, se establece que los magistrados que, habiendo concluido el periodo de cinco años, no hubiesen sido ratificados por el Congreso del Estado, no podrán en ningún caso volver a ocupar el cargo en el mismo Tribunal. Lo anterior se justifica en el hecho de que, se entiende que, derivado del procedimiento de evaluación de su desempeño, se conoció su actuar dentro de la magistratura, y una vez conocidas las pruebas y demás cuestiones inherentes, se determinó que no lo ejerció con el debido profesionalismo, excelencia y probidad.

4. Modificación al periodo de ejercicio del cargo de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Ahora bien, respecto al periodo de ejercicio del cargo de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y su elección, se pretende modificar la forma y términos en que ésta pueda darse, ya que actualmente quien funge como Presidente, es electo por la mayoría de los integrantes del Pleno por un periodo de dos años, el que puede ser reelecto sin limitación alguna.
En los últimos años, la propia sociedad puede advertir, que quienes ocupan la Presidencia de dicho Poder, han sido identificados como personas cercanas al titular del Poder Ejecutivo en turno, con las consecuencias y demás aristas que ello implica; coincidiendo que han sido reelectos en esos cargos por un periodo similar y contemporáneo al periodo al del titular del Poder Ejecutivo.

La iniciativa que nos ocupa pretende hacer efectiva la división de poderes en la entidad y fortalecer esa autonomía e independencia, no solo en su texto, sino en su extensa materialidad, a efecto de que el Ejecutivo deje de tener la injerencia que hasta ahora ha mantenido del Poder Judicial y sean los que integran este Poder, los que, en forma independiente y autónoma, decidan con amplia libertad sobre la elección de su Presidente o Presidenta y su vida interna.

En ese sentido, se plantea que en lugar de dos años, la Presidencia se ejerza por un mayor tiempo, cuatro años, estimando que es un periodo oportuno y suficiente para que la persona que ejerza ese cargo, pueda llevar a cabo las acciones que en su plan de trabajo o proyecto se hubiera planteado, sin que tuviera la incertidumbre de que, al concluir sus primeros dos años, existiera el riesgo de que ya no fuera reelecto para otro periodo, con la consecuente falta de seguimiento a sus propuestas o con el riesgo de que tuviera que actuar en determinado sentido durante ese primer periodo, para obtener la "venia" de la reelección por un segundo periodo.

Asimismo, se plantea que la Presidencia sea rotativa, a fin de generar condiciones que permitan que la mayoría o todos los integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, puedan en algún momento Presidir dicho Poder, procurándose además la alternancia de género.

En tal virtud, con fundamento en las consideraciones anteriores, se presenta a la consideración del Honorable Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución local en los términos siguientes:

Por lo expuesto y fundado se somete a la consideración de esta Legislatura la siguiente iniciativa de reforma al con proyecto de

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO: SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 34, 68, 69, 70 Y 73; SE DEROGA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 58; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 74, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 34

I - XXI...

XXII. Designar a los Magistrados que integrarán el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de entre la terna que someta a su consideración el Pleno del citado Tribunal y conocer sobre la evaluación para su ratificación por parte del Congreso; así como otorgar o negar la aprobación de la propuesta de Fiscal General del Estado que haga el Ejecutivo, en los términos que establece esta Constitución;

XXIII - XXXIII.

Artículo 58

I - X.

XI. SE DEROGA.

XII - XLIV...

Artículo 68

La buena marcha del Poder Judicial corresponde al Magistrado Presidente, quien será designado por el Pleno para un periodo de **cuatro años. La Presidencia será rotativa, procurándose la alternancia de género.**

Artículo 69

I. .

II. Tener por lo menos treinta y cinco años de edad el día de la designación **respectiva**;

III. ..

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite

pena de más de un año de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, **lo** inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

V. Haber residido en **la Entidad** durante los dos años anteriores al día de designación **respectiva**;

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General, Senador, Diputado Federal, Diputado Local, Consejero Jurídico, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa o municipio, durante los cuatro años previos al día de su designación.

VII. Acreditar experiencia en la administración de justicia o en otras ramas de la profesión jurídica en el caso de aquellos postulantes que se distingan por su honorabilidad, competencia y antecedentes. En ambos casos la experiencia será de por lo menos siete años.

Artículo 70

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán designados mediante votación de las dos terceras partes de los diputados integrantes del Congreso del Estado de Colima, de entre la terna que someta a su consideración el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con base en los méritos y capacidades profesionales de los aspirantes, previo concurso de oposición y conforme a los procedimientos señalados por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; garantizando el derecho de la sociedad a contar con magistrados idóneos, independientes y de excelencia, que hagan efectivos los requisitos y principios que en materia de administración de justicia consagra esta Constitución, la Constitución Federal y los tratados internacionales de la materia firmados por el Estado Mexicano.

Los nombramientos de magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con probidad, eficiencia y decoro en la

impartición de justicia o bien, se hubiesen distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

El Congreso del Estado designará a los magistrados mediante determinación debidamente fundada y motivada, designando a personas íntegras e idóneas. Esto se realizará, dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente en que reciba la terna correspondiente y previa comparecencia pública de las personas propuestas.

En caso de que se rechace la totalidad de la terna propuesta o no exista pronunciamiento al respecto, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado someterá una nueva, integrada por distintos aspirantes del mismo procedimiento de selección que hubiese agotado en la primera terna. Si esta segunda terna fuera rechazada o tampoco existe pronunciamiento dentro del citado plazo, ocupará el cargo la persona que, dentro de la misma, designen mediante votación de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Si falta un magistrado por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado someterá una nueva terna para la designación correspondiente por parte del Congreso, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos para ello.

Las faltas temporales de un magistrado, que no excedan de tres meses, se suplirán en la forma que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial **del Estado**.

Artículo 73

Los magistrados y los jueces durarán cinco años en el ejercicio de su encargo, contados a partir de su protesta del cargo. Después de este

período, sólo podrán ser ratificados mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, que apruebe la mayoría simple de los integrantes del órgano correspondiente. El proceso de ratificación de los magistrados se seguirá bajo las siguientes bases:

I. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia iniciará el proceso seis meses previos al término del período para el que fue nombrada la persona titular de la magistratura, garantizando la intervención en dicho proceso, a éste y a la sociedad civil en general.

II. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia designará una Comisión integrada por personal de distintas áreas del Poder Judicial del Estado, quien se encargará de iniciar el procedimiento y de realizar un informe de evaluación sobre el desempeño del magistrado en cuestión, previas diligencias de investigación, entrevistas y desahogo de las audiencias respectivas.

III. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, una vez recibido el informe de la Comisión, lo integrará con el expediente personal del servidor público, constituyendo con esto un sólo cuaderno de evaluación, el cual contendrá los elementos necesarios para acreditar, si cumplió o no, con los requisitos establecidos en el artículo 69 de esta Constitución, así como con el desahogo de manera pronta, completa e imparcial de su trabajo cotidiano; y si demostró o no, diligencia, honorabilidad, excelencia, objetividad, profesionalismo e independencia en el desempeño de sus responsabilidades.

IV. Agotado el procedimiento previsto en las fracciones I, II, III y IV, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, remitirá el original del cuaderno de evaluación al Congreso del Estado de Colima para su resolución correspondiente.

V. Si no se aprueba la ratificación, se notificará de inmediato al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que inicie el procedimiento de nombramiento de un nuevo Magistrado.

VI. Si el Congreso determina la ratificación del magistrado, éste continuará

ejerciendo su encargo en forma ininterrumpida y solo podrá ser privado de la magistratura, en los términos de esta Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima determinará los mecanismos que hagan efectivo el cumplimiento de las bases para el proceso de ratificación de magistrados y regulará lo relativo a la ratificación de los jueces.

Los magistrados y jueces sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos de esta Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si por cualquier motivo no se hace la elección de magistrados o jueces, o los designados no se presentan al desempeño de sus cargos, continuarán ejerciendo las funciones judiciales quienes se encuentren desempeñándolas, hasta que tomen posesión los que se nombren.

Los magistrados que, habiendo concluido el periodo de cinco años, no hubiesen sido ratificados por el Congreso del Estado, no podrán en ningún caso volver a ocupar el mismo cargo en el citado Tribunal.

Artículo 74

I ... XI

XII. Someter ante el Congreso del Estado las ternas para la designación de los magistrados de este Tribunal y el informe para el procedimiento de ratificación, conforme a los requisitos y procedimientos que establezca

ARTÍCULO SEGUNDO: SE REFORMAN LA FRACCIÓN II, IV Y V DEL ARTÍCULO 18, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 19, 23, 26, 27 Y 237; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI Y VII DEL ARTÍCULO 18, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 20 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 18. Requisitos para ser Magistrado

I. …

II. Tener por lo menos treinta y cinco años de edad el día de **la** designación **respectiva;**

III. ..

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, **lo** inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en **la Entidad** durante los dos años anteriores al día de la designación **respectiva**.

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General, Senador, Diputado Federal, Diputado Local, Consejero Jurídico, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa o municipio, durante los cuatro años previos al día de su designación.

VII. Acreditar experiencia en la administración de justicia o en otras ramas de la profesión jurídica en el caso de aquellos postulantes que se distingan por su honorabilidad, competencia y antecedentes. En ambos casos la experiencia será de por lo menos siete años.

Artículo 19. Procedimiento para nombrar magistrados

Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán designados con base en sus méritos y a sus capacidades profesionales, por el Congreso del Estado de Colima, de entre la terna que someta a su consideración el Pleno del Tribunal, conforme al siguiente procedimiento:

1. Emitirá convocatoria que deberá publicarse por lo menos en dos medios de comunicación electrónicos y dos escritos, de mayor circulación en el Estado, en las páginas electrónicas oficiales de los

tres poderes del estado y en el Periódico Oficial del Estado. Dichas publicaciones deberán hacerse por tres veces consecutivas en los medios impresos y en forma permanente durante todo el periodo del procedimiento en los medios electrónicos oficiales, a fin de dar máxima publicidad a dicho procedimiento de ratificación

2. La convocatoria referida deberá señalar las vacantes de magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como los procedimientos y plazos a que se sujetará el proceso de elección de la terna. Además, se invitará en esta, a la sociedad civil en general, a las universidades, a las asociaciones civiles y agrupaciones de abogados, para que puedan postular a aspirantes dentro de un plazo de 30 días naturales.

3. El aspirante para ser considerado en el proceso de integración de la terna deberá entregar y desahogar, dentro del plazo señalado en el numeral anterior, ante el Pleno del Tribunal, como mínimo lo siguiente:

a) Currículum con documentación anexa comprobatoria que acredite sus grados académicos, su capacitación, actualización y su eficiencia en el desempeño de la administración de justicia o alguna otra rama de la profesión jurídica.

b) Un ensayo sobre un tema jurídico según lo indique la convocatoria.

c) Deberá realizar un examen de conocimientos sobre temas propios de la función por la que concursa.

4. Una vez agotado el plazo anterior, dentro de las 48 horas posteriores, se deberá hacer pública la lista de todos los candidatos registrados y la documentación completa presentada por estos, señalando cuáles de ellos cumplieron con la presentación en tiempo y forma de la documentación requerida.

5. Posterior a la publicación anterior, se otorgará un plazo de 15 días naturales para que la sociedad civil en general pueda emitir su opinión escrita, con pruebas que lo fundamenten, sobre la calidad técnica y ética de los candidatos que cumplieron con la entrega de la documentación requerida.

6. Agotado lo anterior, se llevarán a cabo por los integrantes del Pleno del Tribunal, dentro de un plazo de 15 días naturales, las entrevistas personales a cada uno de los candidatos que hubiesen cumplido con la documentación requerida, con el objetivo de disertar el ensayo y temas propios de la función por la que concursan, mismas que serán públicas y transmitidas por medios digitales.

Una vez desahogadas las etapas anteriores, se realizará la selección de los mejores perfiles para integrar la terna, mediante dictamen objetivo del Pleno del Tribunal, debidamente fundado y motivado, contemplando todos los elementos proporcionados en las etapas previas, mismo que deberá ser aprobado mediante votación de las dos terceras partes de sus integrantes, dentro del plazo máximo de 15 días naturales, posteriores al término del plazo fijado para las entrevistas. Dicho dictamen, una vez aprobado, será puesto a consideración del Congreso del Estado dentro de las 24 horas siguientes.

El Congreso designará de entre los integrantes de esta terna al magistrado respectivo, mediante la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, dentro del improrrogable plazo de 30 días naturales y previa comparecencia pública de las personas propuestas, que se transmitirán mediante medios electrónicos.

En caso de que el Congreso del Estado rechace la totalidad de la terna propuesta, el Pleno del Tribunal someterá una nueva, de acuerdo con procedimiento establecido en el presente artículo y bajo los términos establecidos en la presente Ley. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designen las dos

terceras partes de los integrantes del Pleno del Tribunal.

Artículo 20. Duración del cargo de magistrado

El cargo de Magistrado tendrá una duración de cinco años, contados a partir de su protesta del cargo. Después de este periodo podrán ser ratificados si mediante la evaluación correspondiente se demuestra que continuó cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 69 de la Constitución Estatal, y si cumplió con el desahogo de manera pronta, completa e imparcial de su trabajo cotidiano; además, si se demuestra haber realizado con diligencia, honorabilidad, excelencia, objetividad, profesionalismo e independencia el desempeño de sus responsabilidades, en los términos del artículo 73 de la Constitución Local y de esta Ley.
Previo al procedimiento de ratificación y posterior a este si se decidió darle continuidad a su encargo, los magistrados sólo podrán ser removidos en los términos de la Constitución Estatal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 20 Bis. Del procedimiento de ratificación

El procedimiento de ratificación de magistrados se llevará a cabo de acuerdo con lo siguiente:

a) Una Comisión nombrada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e integrada por personal de distintas áreas del Poder Judicial del Estado, iniciará el proceso de ratificación, seis meses previos al término de los periodos para el que fueron nombrados.

b) El plazo para la sustanciación del procedimiento será de 60 días naturales improrrogables, en la que se observará el expediente personal del magistrado, que llevará internamente para dichos efectos el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, debiendo notificar al magistrado respectivo para que intervenga en el proceso y aporte la

documentación complementaria que crea necesaria para acreditar que cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 69 de esta Constitución, así como con el desahogo de manera pronta, completa e imparcial de su trabajo cotidiano; y acreditar haber demostrado diligencia, honorabilidad, excelencia, objetividad, profesionalismo e independencia en el desempeño de sus responsabilidades.

c) La Comisión estará encargada de realizar el siguiente procedimiento:

1. **Iniciará el procedimiento de ratificación del cargo haciéndolo público por lo menos en dos medios de comunicación electrónicos y dos escritos, de mayor circulación en el Estado, así como en las páginas electrónicas oficiales de los tres Poderes del Estado y en el Periódico Oficial del Estado, con el fin de que la sociedad civil en general esté en condiciones de emitir opinión escrita, con pruebas que lo fundamenten, sobre el desempeño del magistrado en su cargo, para lo que se dará un plazo de 20 días. Dichas publicaciones deberán hacerse por tres veces consecutivas en los medios impresos y en forma permanente durante todo el periodo del procedimiento en los medios electrónicos oficiales, a fin de dar máxima publicidad a dicho procedimiento de ratificación.**
2. **Con el inicio del procedimiento también se notificará al magistrado respectivo, para que, dentro de los 20 días señalados en el párrafo anterior, comparezca ante la Comisión a ofrecer las pruebas que considere necesarias para demostrar su eficiencia en el desempeño del cargo, las cuales se deberán analizar en conjunto con su expediente interno y con las opiniones emitidas por la sociedad, de conformidad con el punto anterior;**
3. **Dentro de los 10 días siguientes, la Comisión, deberá realizar las investigaciones respecto de los señalamientos realizados**

por la sociedad civil. Además, dentro del mismo término deberá recabar la información necesaria ante el órgano de control interno, sobre quejas, procedimientos de responsabilidad administrativa y denuncias ante la Fiscalía General del Estado, que trasciendan al desempeño del cargo de magistrado y que puedan afectar su ratificación;

4. **Dentro de los 10 días posteriores, deberá desahogar las pruebas, entrevistas y audiencias que estime pertinentes, mismas que deberán ser públicas y transmitidas por medios digitales, en las cuales se le cuestionará al magistrado sobre por qué considera debe seguir en el cargo y contestará, en vía de réplica, aquellos cuestionamientos que la sociedad civil hubiese realizado.**
5. **Posteriormente, se le dará al magistrado un plazo de 5 días naturales, para que pueda presentar alegatos.**
6. **Una vez desahogado lo anterior, la Comisión tendrá un plazo de 15 días para realizar un análisis de evaluación y emitir un informe, debidamente fundado y motivado, que deberá enviar junto con el expediente respectivo, en un plazo no mayor de 24 horas, al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.**

d) El Pleno se encargará de realizar el siguiente procedimiento:

1. Una vez recibido el informe deberá aprobarlo por mayoría simple mediante el dictamen correspondiente, debidamente fundado y motivado, en un plazo no mayor a 10 días naturales y remitirlo al Congreso del Estado, dentro de las 24 horas posteriores, adjuntando el expediente correspondiente.

e) El Congreso seguirá el siguiente procedimiento

1. Una vez recibido el dictamen aprobado por el Pleno del Tribunal, se turnará dentro de las 48 horas siguientes a la comisión

legislativa correspondiente, para su análisis y dictaminación.

2. **Dicha comisión, le realizará al magistrado en cuestión, una entrevista mediante comparecencia pública, misma que deberá ser transmitida por medios digitales, en la cual el magistrado argumentará por qué considera debe seguir en el cargo y contestará aquellos cuestionamientos que le realicen los integrantes de la comisión.**
3. **Mediante el dictamen correspondiente, debidamente fundado y motivado, la Comisión propondrá a la Asamblea la procedencia o improcedencia de la ratificación del magistrado.**
4. **El Pleno del Congreso, por mayoría simple, aprobará o no el dictamen respectivo.**
5. **Si no se aprueba la ratificación, se notificará de inmediato al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que inicie el procedimiento de nombramiento de un nuevo magistrado.**
6. **Si el Congreso determina la ratificación del magistrado, éste continuará ejerciendo su encargo de forma ininterrumpida y solo podrá ser privado de su cargo, en los términos de esta Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.**

Artículo 23. Atribuciones del Pleno I

- VI...

VII. Remitir al Congreso del Estado la renuncia que presenten los magistrados;

VIII - XXXVIII.

XXXVIII. Someter ante el Congreso del Estado las ternas para la designación de los magistrados de este Tribunal y el informe para el procedimiento de ratificación, conforme a los requisitos y procedimientos que establezca para ello la Constitución Estatal y la presente Ley.

XXXIX. Las demás que le confieran la Constitución Estatal, las leyes y reglamentos correspondientes.

Artículo 26. Elección del Presidente del Tribunal

El Presidente del Tribunal, será elegido por el Pleno del Tribunal en escrutinio secreto para un período de **cuatro años** en los primeros quince días del mes de noviembre del año que corresponda. **La Presidencia será rotativa, procurando la alternancia de géneros.**

Artículo 27. Atribuciones del Presidente del Tribunal

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

I - XIV...

XV. Comunicar al **Congreso del Estado** o en su caso, a la Comisión Permanente, las ausencias definitivas de los **m**agistrados o las temporales por más de tres meses en términos de la Constitución Estatal para los efectos correspondientes;

XVI - XX.

Artículo 237. Ausencia de Magistrados
Si faltare un magistrado por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Pleno y el Congreso del Estado, en el ámbito de su competencia, iniciarán el procedimiento de nombramiento respectivo previsto en la Constitución Estatal y en esta Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Periódico Oficial El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.

TERCERO.- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que, a la entrada en vigor del presente decreto, se encuentren desempeñando su primer periodo de

ejercicio; quedarán sujetos al presente Decreto, y sólo podrán ser ratificados si obra dictamen escrito y expreso en ese sentido por parte del Congreso del Estado.

CUARTO.- El Magistrado que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto se encuentra en funciones de Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, estará imposibilitado para reelegirse para un nuevo periodo inmediato siguiente a la conclusión del periodo para el que fue electo, tomando en cuenta que a la fecha está desempeñando su segundo periodo de dos años como Presidente, mismo que al concluirlo, lo habrá desempeñado por un periodo total de cuatro años, citado plazo señalado como máximo para el ejercicio de dicha Presidencia en el presente Decreto.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 4 de abril de 2019

DIPUTADO LUIS ROGELIO
SALINAS SÁNCHEZ

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO

DIPUTADA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS

DIPUTADO JULIO ANGUIANO URBINA

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO

DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES

Y bueno pues con esto terminamos la exposición de motivos, de esta importante reforma al Poder Judicial para nosotros, parte del Acuerdo de la Cuarta Transformación, también implica democratizar uno de los poderes más

importantes del Estado, para así combatir la impunidad y la corrupción. Es cuánto, muchas gracias.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias compañero Diputado. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. Continuando con el orden de asuntos generales, tiene la palabra la Diputada Jazmín García.

DIPUTADA JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Con el permiso de la Mesa Directiva, la Presidencia y Secretarias, compañeras y compañeros Diputados, Público que nos acompaña y medios de comunicación. El día de hoy presento tres iniciativas la primera de ellas, es para dar certeza jurídica, cuando exista la sanción de reducción del suministro del agua, por parte de los Organismos Operadores del Agua. La segunda, es generar una igualdad de condiciones dentro de los Magistrados del Tribunal Administrativo. Y finalmente, es en relación, la tercera, con la estructura y funcionamiento de los Organismos Operadores de Agua, en cuanto a las sesiones. En la primera de ellas, que corresponde al servicio de agua, de suministro, nosotros sabemos por el orden internacional, que la reducción debe estar debidamente fundada y motivada por ser un derecho humano, un derecho a la salud, previsto en el artículo cuarto, y ha sido ordenado por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los distintos estudios que han realizado, se ha señalado que no puede haber una privación del servicio del agua, ni una privación propiamente del agua misma; sin embargo, en los hechos, estamos observando que la reducción se hace de una manera arbitraria, con base en las leyes que existen, las cuales carecen de un procedimiento claro, pero sobre todo, que genera la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 y 16 Constitucional, y que con ello, se tenga una correcta aplicación del artículo 4º Constitucional, que es el derecho a la salud. Por lo antes expuesto, es que solicito esta iniciativa sea insertada a su letra, con proyecto de decreto, para la adición del artículo 23 Bis en la Sección Tercera relativo a la Estructura y Funcionamiento de los Organismos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, quedando de la forma siguiente: Artículo 23 Bis.- Cuando algún integrante del Consejo de Administración, tenga

impedimento para asistir a las sesiones convocadas por el Consejo, podrá acreditar una persona sustituta temporal, mediante oficio expedito, para que en su nombre profese los intereses que el integrante tendría, siendo solidariamente responsable el Consejero, como su sustituto en la sesión. Dicho oficio será presentado en la sesión correspondiente, para acreditar la personalidad respectiva de quien asista en nombre del Consejero impedido para asistir, plasmando las generales del sustituto y siguiendo las reglas del mandato civil. Artículos Transitorios, bueno, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial y quedan derogadas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Esto tiene relación porque al momento de querer alegar en una sesión de Consejo de los Organismos Operadores de Agua, cualquier situación que duele o que adolezca a la población, nos encontramos en el impedimento de que muchos Consejeros no asisten o que asisten los sustitutos, pero que los mismos no se encuentran legalmente acreditados, es decir, cualquier persona puede ir en nombre y representación de su servidora, como miembro del Consejo, sin ninguna acreditación legal. Pero en ese mismo sentido, para cuando se ejecuta la reducción del agua que mencionaba hace unos instantes, está, esta otra iniciativa, que es la reforma al artículo 102 Bis, Título Quinto relativo a las Infracciones, Sanciones y Recursos Administrativos de la Ley de Aguas para el Estado de Colima, Capítulo Primero para quedar de la siguiente manera: Artículo 102 Bis.- Las sanciones impuestas cuando se trate de la reducción del servicio del agua serán mediante el levantamiento del acta correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 99.- La persona que desahogue la diligencia de reducción deberá estar legalmente acreditada para el efecto, y se hará acompañar por una licenciada o licenciado en trabajo social, acreditada por el organismo operador. En el acta, se asentarán las circunstancias que imperen dentro de la vivienda, sujeta a la sanción, conteniendo al menos: 1.- Día y hora de la ejecución de la sanción; 2.- Referencia del mandato notificado previamente; 3.- Referencia de haberse cumplido el término establecido para ejecutar la sanción conforme al numeral 77, 4.- Número de integrantes de la vivienda desglosados por edad; 5.- Anotación de

aquellos integrantes que tengan alguna discapacidad o enfermedad; 6.- Constancia del nombre de quien funge como jefe de familia; 7.- Constancia si el inmueble que resulte afectado es propiedad de personas jubiladas, pensionadas, adultos mayores con capacidades diferentes, madres de familia o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas; 8.- Constancias y el inmueble encuadra dentro de la tarifa por la cual le han hecho los cobros y/o la que hace referencia de acuerdo a la norma que tenga el organismo operador de agua, para tasar las características de la tarifa de cobro.

En el mismo acto, la persona con licencia en trabajo social que acompaña en la diligencia, realizará la pericial respecto de la capacidad económica de, el usuario, o usuaria a quien se le aplicará la sanción. El organismo operador, al momento de la reducción del suministro de agua, asegurará el abastecimiento de un volumen de litros que deberá corresponder a 80 litros por número de habitantes, plasmados en el acta, realizando los cálculos y acciones que estime pertinentes.

Una vez ejecutada la sanción se le dará vista de oficio a la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima, con la finalidad de que le dé seguimiento periódico de acuerdo a los criterios y normativas, que apliquen para el caso. En la circunstancia que el usuario, usuaria se niegue a la realización de la diligencia, se estará en razón de ello, aplicando supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué se pretende precisamente aquí? que no quede absolutamente una persona sin el derecho al servicio del agua, y que si se va a ser una sanción, está sea de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la persona que será afectada; es decir, que no se afecte a personas en situaciones de vulnerabilidad, o que aquellas que han incumplido con el pago, en razón de un cobro excesivo y desmedido, que no corresponde la tarifa, al tipo de casa o vivienda que tengan.

Finalmente, compañeras y compañeros, la tercera iniciativa es con proyecto de decreto para la adición de una fracción al artículo 69, Título Quinto, Capítulo 1º del Poder Judicial. Modificación del párrafo cuarto y quinto del artículo 77, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar

conforme a lo siguiente: artículo 69.- Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere, fracción I a V permanece, fracción VI.- Al menos ser uno de los tres finalistas en la convocatoria destinada para cada cargo el Ejecutivo emitirá la convocatoria basándose en los estándares de constitucional, y de derechos humanos, bajo las bases razonables y objetivas que consagren los principios de excelencia, objetividad, universalidad, imparcialidad y interdependencia judicial; artículo 77.- Párrafo cuarto, el Titular del Poder Ejecutivo propondrá a los tres finalistas, por cada cargo, derivados de una convocatoria y procedimiento de selección, donde garantice la libre concurrencia de la sociedad, bajo un método cuantificable y objetivo, basado en los mejores méritos comprobables de las personas contendientes y capacidad profesional, para el ejercicio de la función jurisdiccional.

El Congreso, hará la designación dentro del plazo de diez días hábiles, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes y previa comparecencia de las personas propuestas. Si el Congreso niega la aprobación dentro del plazo indicado, lo notificará al Titular del Poder Ejecutivo, quien deberá realizar, una segunda convocatoria, procediéndose en los mismos términos del artículo 69, fracción VI. - En caso de que el Congreso rechace dos ternas finalistas emanada de la convocatoria respectiva, se tendrá por aprobada la que libremente determine el Ejecutivo de los propuestos.

Esta iniciativa tiene su razón de ser, en lo que hemos estado viendo y observando, respecto de los nombramientos que carecen de una convocatoria pública y de finalistas, que, a través de esta convocatoria, hayan logrado un procedimiento adecuado, para obtener el cargo de Magistrados. Lo anterior es así, porque si ese proceso se les está requiriendo a los jueces, que, dentro del rango, dentro de las categorías del Poder Judicial se ubican en los espacios relativamente más bajos, de la impartición de la justicia, con el contacto directo en primer encuentro con la sociedad, creo yo, que, para un cargo de mayor jerarquía, es necesario también transparentar los procesos bajo los principios que legalmente rigen todo procedimiento. Es cuánto.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Muchas gracias compañera Diputada, se toma nota y se manda a comisiones: la primera relativa a la reducción del suministro de agua, se manda a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. De la segunda, referida a la acreditación de representantes se turna a la Comisión de Estudios Legislativos Y Puntos Constitucionales. Y la tercera, relacionada con la designación de magistrados se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia Gobernación y Poderes. Continuando con asuntos generales se le concede el uso de la voz a la diputada Claudia Aguirre.

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras secretarias, Diputadas y Diputados, así como las personas que nos acompañan, quiero, este, antes de comenzar, este sabemos que somos muchas las intervenciones que va a haber, y entonces por cuestión de tiempo, solicito a la Mesa Directiva, este obviar la lectura de la exposición de motivos, pidiendo sea insertada de forma íntegra en el diario de debate, debido a que ya fue enviada por correo electrónico a todos ustedes.

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E S

LA DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 39 fracción I de la Constitución Política del Estado de Colima, 22 Fracción I, 83 fracción I y 84 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente ***Iniciativa con Proyecto de Decreto*** que reforma a los artículo 10 fracción IV, y se adiciona el artículo 17 y 18 de la Ley de LEY DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES en base a la siguiente:

E X P O S I C I O N D E M O T I V O S:

En el marco del Día Internacional de la Mujer que acabamos de conmemorar el pasado 08 de marzo, es que ocurro a presentar esta iniciativa.

Este Día nos hace reflexionar sobre el largo camino que nos queda por recorrer para alcanzar a igualdad de género, pero también nos inspira a seguir Iuchando por ella.

EI fortalecimiento de nuestras Instituciones es fundamental para garantizar el respeto, la protección y la promoción de todos los derechos que tenemos las mujeres.

No existe un proceso para designar a la Titular del lnstituto, es decir, a la persona que ocupa la Dirección General, simplemente se trata de designación (y remoción) directa por parte del Gobernador del Estado.

Esto es un problema, porque se presta a compadrazgos, siendo común que los Gobernadores en turno designen a mujeres como Presidentas Ejecutivas del lnstituto que no tienen experiencia alguna en la defensa de los derechos de Ias mujeres, ni en el diseño y ejecución de políticas públicas de género transversales.

El pasado mes de enero de 2018 El Observatorio Ciudadano para el Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Colima, señaló que a 6 meses de la declaratoria de Alerta de Género no se ve una disminución en hechos violentos contra las mujeres.

“Nosotros no vemos que haya disminuido la violencia, no vemos que se dejen de cometer feminicidios y no hemos visto realmente cuál es el trabajo en concreto que está haciendo el Gobierno del estado, y como no informan y tampoco quieren reunirse con el observatorio, no se sabe qué se está haciendo”, señaló Adriana Ruiz Visfocri, una de las coordinadoras del Observatorio Ciudadano para el Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Colima.

Refirió que el Observatorio ha solicitado en dos ocasiones reunión con el gobernador del estado, Ignacio Peralta y hasta el momento no se ha dado.

Señaló que también se solicitó una reunión con los integrantes de la actual legislatura local y tampoco ha sido posible, “únicamente los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado se han reunido con nosotras”. Ruiz Visfocri dijo que se desconoce si hay avances en las medidas implementadas para erradicar la violencia de género contra las mujeres y tampoco se sabe cómo se han aplicado los recursos.

“Los resultados están a la vista, siguen apareciendo mujeres asesinadas casi todos los días. El día primero de enero asesinaron a una mujer en Manzanillo y de ahí todos los días se sabe de mujeres encontradas muertas, mujeres que son agredidas físicamente, mujeres que sufren de violencia institucional al no tener la adecuada atención por parte de las instituciones”, apuntó.

Pese a la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para cinco municipios de la entidad, hace más de 19 meses, continúan los asesinatos de mujeres en Colima, pues el 2018 cerró con 79 casos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Esa cifra es la más alta de la historia reciente del estado, pero en los últimos años, desde 2016, se registró un crecimiento sostenido que mantiene al estado en el primer lugar nacional de crímenes contra mujeres.

Por lo antes expuesto y fundado se pone a la consideración de esta Honorable Congreso del Estado la siguiente:

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la **LEY DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES** ***para quedar como sigue:***

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma artículo 10 fracción IV, y se adiciona el artículo 17, 18 y 19, de la **LEY DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES** para quedar como sigue:

“LEY DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES”

***ARTÍCULO* 11**.- **La Dirección General estará a cargo de una titular que será designada por el Gobernador del Estado a partir de una terna propuesta por el Consejo Directivo, con una duración en su encargo de cinco años, pudiendo ser reelecta para un periodo igual por una sola ocasión. Para la elección de quien ocupará el cargo de la Dirección General del instituto, el Consejo Directivo deberá publicar una convocatoria pública, de la cual se elaborará una terna, la cual será propuesta al titular del Poder Ejecutivo para su designación, y tendrá las siguientes atribuciones**;

ARTÍCULO 17.- Para la elección de quien de quien ocupará la Dirección General del instituto, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. - Poseer ciudadanía mexicana, no pertenecer al Estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto o secta religiosa, con residencia mínima de cinco años en el Estado, en pleno goce y ejercicio de sus derechos cívicos y políticos;

II.- No haber sido condenada por delito intencional alguno o inhabilitado para algún cargo público;

III.- Haber destacado por su labor a nivel estatal en favor de la igualdad y equidad de género o en actividades relacionadas con la promoción de las oportunidades, el trato, la toma de decisiones y los beneficios del desarrollo para las mujeres;

ARTÍCULO 18.- El proceso de elección será el siguiente:

Para la elección de quien ocupará la Dirección General del instituto, el Consejo Directivo deberá publicar una convocatoria que deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I.- Obligación para la aspirante de presentar un currículum vitae, así como una versión del mismo en versión pública, con su firma de autorización para que esta versión pública de su currículum vitae sea

publicada;

II.- Obligación para la aspirante de presentar un escrito libre, en el que justifique su intención de presidir el instituto;

III.- Obligación para la aspirante de allegar las pruebas documentales, testimoniales o cualquier otra que sirva para probar que cumple con los requisitos;

IV. Vigencia de la convocatoria pública, misma que deberá ser mínima de 10 días hábiles a partir de su publicación oficial y

no deberá exceder de 15 días hábiles a partir de su publicación oficial.

V.- Una vez cerrada la convocatoria, el Consejo Directivo procederá a una revisión de los expedientes de todas las aspirantes, debiendo prevenir a quienes no cumplan con todos los requisitos para que en un plazo no mayor a 3 días hábiles cumplan la prevención. Si no se cumpliere la prevención en este término, se desechará su solicitud.

VI.- Pasado el periodo de prevenciones, el Consejo Directivo celebrará audiencias públicas, en las que citará a comparecer por separado a todas las aspirantes que hayan cumplido con los requisitos para que se lleve a cabo una entrevista individual. Por lo menos 2 dos días hábiles antes de que se celebre la primera entrevista, el Consejo Directivo deberá publicar las versiones

públicas de los currículums vitae de las aspirantes que hayan cumplido con los requisitos y pasado a la etapa de audiencias públicas, haciendo uso de tecnologías de la información Y la comunicación.

VII.- En la etapa de audiencias públicas, durante la entrevista de cada aspirante, el Consejo Directivo tendrá a su cargo la formulación de las preguntas, pero deberá dar voz a por lo menos un(a) integrante de la sociedad civil organizada para que formule por lo menos un cuestionamiento a la aspirante. El periodo de audiencias públicas no podrá ser menor a 3 días hábiles ni mayor a 5 días hábiles.

VIII.- Terminadas las audiencias públicas, se abrirá la etapa de evaluación, misma que no será menor a 3 días hábiles ni mayor a 5 días hábiles. En esta etapa, el Consejo Directivo deberá evaluar los perfiles y realizar una rúbrica en la que deberá fundar y motivar el cumplimiento de todos los requisitos legales y la idoneidad de cada aspirante.

IX.- Concluida esta etapa de evaluación, el Consejo Directivo tendrá 1 día hábil para publicar, haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación, su rúbrica de evaluación, fundada y motivada, de cada una de las aspirantes que acudieron a las audiencias públicas.

X.- Concluido lo anterior, el Consejo Directivo tendrá un plazo perentorio de un día hábil presentar una terna al titular del poder ejecutivo y que este haga la designación de quien ocupará la Dirección General del instituto, debiendo fundar y motivar su decisión.

ARTÍCULO 19.- La Titular Dirección General del Instituto, podrá ser removida antes de que termine el periodo de su gestión cuando así lo decida el Consejo Directivo por las dos terceras partes de sus votos, justificando su decisión. Se entiende por causa justificada la emisión de expresiones discriminatorias, el uso de lenguaje sexista en comunicaciones oficiales, el abuso de

poder, el abuso laboral hacia las personas que laboran en el instituto y cualquier otra causa análoga.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de abril del año 2019 dos mil diecinueve.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

A T E N T A M E N T E:

“COMPROMISO Y HONESTIDAD CON LA GENTE”

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA

2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño”

Colima, Col., a 04de abril del 2019

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Muchas gracias compañera diputada. Se toma nota y se turna a las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad y Equidad de Género. Continuando con asuntos generales se le concede el uso de la voz al Diputado Guillermo Toscano. Recordarles compañeros Diputados que estemos atentos a la hora de la votación, y sobre todo que guardemos silencio cuando nuestros compañeros están en la tribuna. Muchas gracias.

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Con el permiso de la Presidencia, de los compañeros Diputados, público asistente. El suscrito Diputado Guillermo Toscano Reyes, así como los demás Diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Morena, de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122, 123, 124 y 126 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Punto de Acuerdo; misma que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro del servicio de transporte público existe una serie de obligaciones para los concesionarios, permisionarios, arrendatarios y conductores de los vehículos, las cuales deben cumplir para poder prestar el servicio que se les concesiona.

Particularmente existen dos temas que afectan directamente al conductor, los cuales han sido parte del clamor social dentro del gremio y que merece especial atención por parte de esta Soberanía, los cuales consisten en:

1. Seguridad social y prestaciones laborales; y
2. Seguro de vehicular, para los efectos de responsabilidad civil.

Sobre estos temas, la Ley de Movilidad Sustentable del Estado es clara al decir en su artículo 84 fracción I, que **los conductores de vehículos de transporte público tendrán derecho al trabajo y seguridad social** como lo marca la Ley Federal del Trabajo, esto es, tienen derecho a un salario, a seguridad social, vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades, como derechos mínimos.

A su vez, la misma Ley dispone en su artículo 86, fracciones XI y XIV, que los concesionarios, permisionarios o arrendatarios tienen el derecho y la obligación de:

- **Elegir de forma libre la empresa u organización que brinde los servicios de cobertura de seguro o su equivalente por responsabilidad a pasajeros y daños a terceros**, que se encuentren establecidos en el Registro de Empresas de Seguros.

- **Contar con pólizas vigentes de seguro del pasajero o su equivalente y de responsabilidad civil por daños a terceros por vehículo o su equivalente**, expedida por institución legalmente autorizada o por autorización de la Secretaría en el caso de mutualidad que garantice a los usuarios el pago de los daños que se les puedan causar, con motivo de la prestación de servicio o en su caso por su equivalente en los términos de esta Ley y su Reglamento respectivo

Como se advierte, la responsabilidad del conductor no es la contratación de seguros o pólizas para el pasajero que lo ampare ante una responsabilidad civil por daños a terceros o su equivalente, dicho seguro debe ser por unidad y no corporativo; sino que es del concesionario, permisionario o arrendatario.

En la realidad sucede que los conductores deben pagar una cuota anual de $500.00 pesos a la organización que pertenezcan, llámese CTM, CNOP, etc., a especie de mutual o seguro para que la organización gremial responda por daños y perjuicios a terceros; hecho que no sucede, no hay tal respaldo a los conductores por daños a terceros ni por accidentes dentro de sus actividades laborales.

Cabe mencionar que dicha cuota no está justificada en la ley; no constituye una póliza o seguro ante terceros, por lo tanto, el conductor es quien debe hacerse cargo de los gastos o responsabilidades derivadas de un percance.

Esta situación denota una ausencia total de dos autoridades principales en esta materia. La primera de ellas es la Secretaría de Movilidad y la otra es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La Secretaría de Movilidad tiene la obligación de inspeccionar vehículos y conductores para que cumplan con sus obligaciones previstas en la ley; entre ellas, está que los vehículos deben contar con seguro por responsabilidad civil por daños a terceros, y deben ser contratados por los concesionarios, permisionarios o arrendatarios. NO ES UNA RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe ser una autoridad vigilante de manera permanente de TODAS LAS FUENTES DE TRABAJO, como lo es un vehículo de transporte público; con el objeto de que sus conductores cuenten con los derechos laborales y de seguridad social, como es el salario, vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades, como mínimo.

Lo triste es que ninguna de las dos autoridades hace su trabajo o cumple con su responsabilidad como se lo marca la Ley; hacen como que revisan en los refrendos anuales de las concesiones y hacen como que supervisan a las fuentes de trabajo para ver si cumplen con la normatividad laboral.

Basta ya de que las autoridades pasen por encima de los derechos de la sociedad y protejan únicamente los derechos económicos de las empresas; también el trabajador es un activo importante de la economía y que merece un respeto y trato digno en su fuente de trabajo.

No podemos permitir que los conductores del servicio público sean extorsionados por los gremios de transportistas mediante el pago de cuotas no previstas en la ley para que puedan operar; los gremios, en cambio, deberían de proteger los intereses de éstos, ya que éstos son quienes coadyuvan a generar la riqueza que poseen.

Ante esta situación, los suscritos iniciadores consideramos importante hacer un atento exhorto al Secretario de Movilidad y al Secretario del Trabajo y Previsión Social, para que informen por escrito y comparezcan ante esta Soberanía, a efecto de que den a conocer qué acciones de vigilancia o supervisión han realizado para identificar el cumplimiento de las prestaciones laborales y de seguridad social de los conductores del servicio público, así como el cumplimiento de la contratación de seguros o pólizas por cuestiones de responsabilidad civil contra terceros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Soberanía, se propone el siguiente proyecto de Iniciativa de

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se hace un atento exhorto al Arquitecto Rafael Martínez Brun, Secretario de Movilidad para que informe por escrito y comparezca ante esta Soberanía a efecto de que dé a conocer, cuando menos, lo siguiente:

a) Qué acciones ha venido realizando la Secretaría a su cargo para asegurarse de que los vehículos del transporte público cuentan con la contratación individual y vigente de seguros por responsabilidad civil contra terceros;
b) Que acciones ha realizado ante la falta de este requisito cuando revalidan o refrendan su permiso anual; y
c) El número de conductores que operan como empleados de permisionarios, concesionarios y arrendatarios de vehículos de transporte público.

SEGUNDO.- Se hace un atento exhorto al Licenciado Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión Social, para que informe por escrito y comparezca ante esta Soberanía a efecto de que dé a conocer, cuando menos, lo siguiente:

a) Qué acciones ha venido realizando para identificar que los conductores del servicio de transporte público cuentan con los beneficios de protección al salario y de seguridad social;
b) Cuántos casos de informalidad laboral ha encontrado en el servicio de transporte público; y
c) Qué acciones ha realizado ante la identificación de estos casos.

TERCERO.- La comparecencia de los servidores públicos antes mencionados, tendrá lugar en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, el 09 de marzo de 2019, a partir de las 10:00 horas como reunión de trabajo.

CUARTO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso, comunique lo anterior a las autoridades exhortadas, para los efectos legales correspondientes.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Rectifico, la comparecencia de los Servidores Públicos antes mencionados tendrá lugar en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica”, el 09 de marzo de 2019, a partir de las 10:00 horas en reunión de trabajo. Muchas gracias, es cuánto.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea el Punto de Acuerdo que presentó el Diputado Guillermo Toscano, recomendándoles que dentro de la discusión de dicho

documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 de su Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Luis Fernando Escamilla.

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Con su permiso. Compañeros, pues la verdad me sumo con todo el respaldo que podemos darle, compañero Toscano, es tiempo de acabar con las viejas prácticas lo que se comentó aquí ahorita, hace unos momentos es real, a los taxistas, hay un grupo de poder que los mantiene oprimidos, ahí poquitos deciden por muchos y no les deja la libertad de poder crecer. Cualquiera que esté en contra de los derechos, cualquiera que esté en contra del pensamiento, de los líderes de los grupos, lo hacen a un lado, o lo castigan, impidiendo el crecimiento de los mismos, me da mucho gusto que ahora ya haya una diferente forma de hacer política, me da gusto que tengamos el valor de defender a nuestra gente, y nos sumamos con todo el respaldo de la Comisión de Movilidad, porque las viejas prácticas no llegarán a nuestro presente. Es cuánto.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias compañero Diputado. Tiene el uso de la voz el Diputado Rogelio Rueda.

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la Presidencia. Quiero ser muy breve, porque lo que quiero plantear es que me parece sano, correcto, que se comparezca para este efecto, por los funcionarios mencionados, lo que creo que vale la pena cuidar, es que establezcamos si es una comparecencia, como dice el documento por escrito, o una reunión de trabajo, como se dijo aquí en la Tribuna, si es una reunión de trabajo, o es una comparecencia es un punto a dilucidar, a establecer, ojalá que el iniciador nos lo aclare, y segundo si es una reunión de trabajo con la Comisión correspondiente, naturalmente teniendo presente que todos los diputados podemos participar finalmente no es un tema que se vaya a votar, y también si se tratase, no ante la Comisión, sino ante el Pleno del Congreso, lo correcto es que fuera en este espacio, no necesariamente en la sala Francisco J. Mujica, solamente son formalidades pero que vale la pena tener presente para que se puedan precisar,

por el iniciador, y poder tener presente ¿en qué términos quedaría?. Reiterando la disposición de respaldar el fondo del asunto, porque nos parece correcto que se nos comparta, cómo es que se hace para cumplir con las obligaciones que la ley establece. Muchas gracias.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias compañero Diputado, se le da el uso de la voz al Diputado Guillermo Toscano, para que precise lo que el Diputado comentó.

DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES. Le agradezco al diputado Escamilla, al compañero Rogelio, hacer esta aclaración. Va a ser, van a hacer citados a una reunión de trabajo, abierta a todos los diputados, por la relevancia, importancia del asunto, están, van a estar todos invitados. Lo vamos a hacer como lo hicimos en la reunión de trabajo anterior con el Secretario de Seguridad y con el Fiscal, una reunión de trabajo de los 25 diputados, que presidida por la Presidenta claro que si, sale. Gracias

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias compañero Diputado. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa, en los términos que fueron precisados.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la Presidencia.....

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Perdón Diputada, tiene el uso de la voz la compañera Diputada Claudia Aguirre.

DIPUTADA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Si gracias, brevemente, nada más, este, compañero, decirle que al igual que los demás compañeros diputados, pues también este nos sumamos, y como Secretaria también de la Comisión que preside el compañero Diputado Luis Escamilla, pues también para buscar y ver lo de los cobros que hacen, al momento de renovar las licencias, y hacer el trámite, así como si fuera pues la primera vez, y repercute en los bolsillos de los ciudadanos. Entonces como miembro de esta Comisión pues me preocupa

y ocupa, por tal motivo, me sumo también y estamos respaldando su apoyo. Muchas gracias.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Muchas gracias compañera Diputada. Con el resultado de la votación..... Ahora si compañeros, solicito en los términos ya señalados, a la Secretaría recabe la votación económica del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados y Diputadas, en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Guillermo Toscano Reyes. Instruyo a la Secretaría le de trámite correspondiente. Continuando con asuntos generales, se le da el uso de la voz a la Diputada Remedios Olivera.

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada Presidenta. En virtud de que hay agendados muchos asuntos generales, voy a hacer una síntesis breve de la iniciativa que pondré a consideración de esta Asamblea, y pediré se integre completa, íntegramente al diario de los debates. El documento que voy a presentar ahora obedece a una razón, todos hemos hecho en momentos importantes, cuestionamientos acerca de un mal que aquejan a todo el país, me estoy refiriendo a la corrupción. En ese sentido el pasado jueves 21 de marzo en el Senado de la Republica, un grupo de diputados pertenecientes a Movimiento Ciudadano, interpusieron una Iniciativa para la modificación de diversas disposiciones del Código Penal Federal, y la Ley de Responsabilidades Administrativas en materia de Inhabilitación por Hechos de Corrupción. Esta Iniciativa tiene como finalidad que, en algunos casos, la inhabilitación sea definitiva, es decir, no solamente temporal, que quienes trasgredan la ley y abusen de autoridad o desvían recursos, su sanción pueda ser de manera definitiva, es

decir, estamos hablando de muerte civil, para quienes trasgreden la ley de hagan daño a la ciudadanía, con desvíos de recursos, omisiones o abusos de poder puedan tener una sanción de esta naturaleza y no vuelvan, por ningún motivo, a ocupar cargos públicos. En ese sentido su servidora está poniendo a consideración de esta Soberanía, una Iniciativa para reformar también, en el Estado de Colima, en el artículo 233 del Código Penal vigente en el Estado de Colima, para homologarlo al marco jurídico recién aprobado y establezca la figura de inhabilitación permanente, en esos casos de corrupción. En ese sentido yo pediré que se inscriba pues, como mencionaba al inicio, totalmente la Iniciativa al diario de los debates, y voy a apelar a la responsabilidad de todos ustedes para que en el momento del dictamen, tengamos la aprobación de la mayoría de este Congreso, porque si queremos poner fin a la impunidad, tenemos que poner fin a la corrupción, pero hacerlo con medidas enérgicas. Es cuanto, muchas gracias.

La Diputada Única Ma. Remedios Olivera Orozco, del Partido Movimiento Ciudadano de la Quincuagésima Novena Legislatura del periodo constitucional 2018-2021 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que propone reformar el artículo 233 del Código Penal Publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 11 de octubre de 2014; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

El pasado jueves 21 veintiuno de marzo del año en curso, el pleno del Senado de la República aprobó la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de inhabilitación por hechos de corrupción, presentada por senadores de Movimiento Ciudadano, turnado el 11 once de septiembre de

2018 dos mil dieciocho a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

En la que se consideró que Nuestro País se encuentra en un nivel de percepción de corrupción alarmante, estancado como uno de los lugares donde se perciben constantemente actos de corrupción en todos los niveles de gobierno, lo que ha sido documentado por transparencia internacional a través de su índice anual. En su más reciente reporte, correspondiente al año 2017, nuestro país se colocó en el lugar 135 de 180 con una calificación de 29, sin registrar avances sustanciales con respecto al año anterior. México "se encuentra empatado con República Dominicana, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Rusia, Kirguistán y Laos. A nivel regional, México se encuentra en la sexta peor posición, solo por arriba de Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Barbados y Chile encabezan el top cinco en la región.

No menos cierto es, que los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos vulneran los derechos humanos, ya que el desvío de recursos o de sus mismas facultades y obligaciones conllevan a una desigualdad social aparentemente imperceptible pero que genera un daño directo a las oportunidades de desarrollo para mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas que conformar a todo el país.

En esta línea, la reciente aprobada iniciativa establece en el Código Penal Federar la figura de inhabilitación permanente por actos de corrupción, lo cual garantiza que cualquier servidor público que sea sancionado por estos hechos no pueda volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública. Al mismo tiempo, establece que los particulares que sean sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisición de la administración pública, norma jurídica que es

En ese sentido, es preciso referir el Código Penal vigente para nuestro Estado publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 11 de octubre de 2014,

contempla en la SECCIÓN TERCERA de DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD TITULO PRIMERO “DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS O DE PARTICULARES Y EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES el artículo 233 que a la letra establece:

ARTICULO.233. Para efectos de este Título son servidores públicos los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo, o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o en la Administración Pública Estatal o Municipal, así como a los servidores públicos de los órganos estatales autónomos previstos en Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Se reputarán también como servidores públicos a quienes administren recursos económicos estatales o municipales, propios o por destino independientemente de la forma jurídica de aplicación de dichos fondos.

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente.

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un plazo de uno a veinte años, atendiendo a los siguientes criterios:

I. Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del

delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; y

II. Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior.

Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 233 Bis de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito.

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente:

I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;

II. Las circunstancias socioeconómicas del responsable;

III. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; y

IV. El monto del beneficio que haya obtenido el responsable.

Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.

Cuando los delitos a que se refieren los artículos 234, 237, 238, 239 y 242 Bis 5 del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación del Congreso del Estado, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.

En aras de armonizar mejoras sustanciales al funcionamiento del sistema político y de Gobierno del Estado de Colima, particularmente al Código Penal vigente en el Estado de Colima, con la reciente reformas al Código Penal Federal, la suscrita considero que en el artículo 233 del Código Penal vigente para el Estado de Colima, debe ser homologado al marco jurídico recién aprobado, el cual establece como novedad la figura de inhabilitación permanente por actos de corrupción, lo anterior a efecto de actuar con congruencia y garantizar a nuestra sociedad colimense que cualquier servidor público que sea sancionado por estos hechos no pueda acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública. En mismos términos se establezca que los particulares que sean sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisición de la administración pública.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que la suscrita Ma. Remedios Olivera Orozco, en mí carácter de diputada, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

D E C R E T O

ÚNICO. Se reforma el artículo 233 del Código Penal Publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 11 de octubre de 2014, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 233. Para efectos de este título son servidores públicos los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo, o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o en la Administración Pública Estatal o Municipal, así como a los servidores públicos de los órganos estatales autónomos previstos en Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

Se reputarán también como servidores públicos a quienes administren recursos económicos estatales o municipales, propios o por destino independientemente de la forma jurídica de aplicación de dichos fondos.

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente.

De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación **temporal o definitiva** para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado.

Tratándose de la inhabilitación temporal, cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la inhabilitación será por un plazo de uno hasta diez años.

La inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito excede el límite señalado en el párrafo anterior.

Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar, en caso de que el responsable tenga el carácter de servidor público, además de lo previsto en el artículo 233 Bis de este Código, los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito.

Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación **temporal o definitiva** para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente:

I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;
II. Las circunstancias socioeconómicas del responsable;
III. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; y
IV. El monto del beneficio que haya obtenido el responsable.

Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena.

Cuando los delitos a que se refieren los artículos 234, 237, 238, 239 y 242 Bis 5 del presente Código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a ratificación del Congreso del Estado, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.

T R A N S I T O R I O S

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento, solicito que la presente Iniciativa sea turnada a la comisión o comisiones correspondientes, para su debido estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en su caso, aprobación, en el plazo indicado por la ley.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Muchas gracias compañera Diputada. Se toma nota y se turna la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Continuando con asuntos generales se le da al uso de la voz a Luis Fernando Escamilla.

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Compañeros buenas tardes, con su permiso. Más que nada es un comentario que quiero hacerle a todos ustedes, para unirnos, para que todos usemos nuestro poder de gestión que tenemos, porque en el transcurso de la semana, imagino que todos se dieron cuenta, tuvimos varios siniestros en el estado, normalmente fueron fuegos, fuegos que acabaron con hectáreas, con negocios. El día de ayer con casas y con algunos vehículos. Es lamentable que aquí vengamos a decir que estamos haciendo un buen trabajo, cuando allá afuera los elementos que tenemos de reacción ante un siniestro, no cuentan con las herramientas para hacer su trabajo, no voy a decir de qué municipios, pero el día de ayer, cuando solicitamos el apoyo de las brigadas, para que combatiera un incendio, que va rumbo a la reserva de la Biósfera de Manantlán, que todos tenemos el interés de proteger, ayer esta gente llegó y no tenía ni palas, ni machetes, ni ningún tipo de herramienta para poder apagar ese fuego. Los compañeros Vladimir y Livier el día de ayer me auxiliaron, cuando estaba yo transitando en una de las carreteras, la misma población nos hizo el alto porque estaban desesperados con miedo, de que el fuego se estaba propagando hace sus casas, debido a que el viento era muy fuerte, en ese lugar no había señal tuvimos que desplazarnos hasta un municipio para pedir ayuda, pero cuando la ayuda llegó, no contaban con las herramientas para poder hacer su trabajo. Como estamos invirtiendo en muchas cosas, pero en la seguridad de nuestra propia población, no tenemos nada que les garantice a ellos que ante un siniestro, la ayuda va a llegar. Es por eso que me gustaría que todos juntos compañeros, utilizáramos el poder de gestión que tenemos en los tres niveles de poder, para conseguir las herramientas para la gente de Protección Civil del Estado de Colima, ya que no cuentan con herramientas. Llegaron con una cuerda a intentar apagar un incendio, disculpen, me parece de broma esto, pero con eso llegaron no hay más. Ninguno de nosotros va a andar apagando incendios o

rescatando gente, ninguno de nosotros va a andar ofreciendo su cuerpo para que se queme, para que se ahogue, o vamos a andar arriesgando la vida, pero si les pido de favor que si esta gente tiene la voluntad de arriesgar su vida para salvar las de nosotros en algún momento, de perdida tengan las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo. Quiero apelar a su lado bueno por favor compañeros, y que buscamos el mecanismo, para que esta gente de pérdida ya que no tienen mucho, un salario tengan las herramientas para poder reaccionar ante un siniestro. El fuego se sigue propagando, y el día de mañana todos vamos a salir a decir, qué vamos a hacer, estamos haciendo y vamos a generar, pero esa reserva está a punto de prenderse en fuego y nadie lo va a parar. Muchas gracias.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias compañeros, tiene el uso de la voz la compañera Diputada Martha, desde aquí desde su lugar.

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Sí muchas gracias, Presidenta. Sobre el mismo asunto del compañero, también en Manzanillo se inició ayer un incendio muy grande, y no hubo quien pudiera auxiliar, se metieron gente de los fraccionamientos, se habló a CAPDAM, nunca llegó, se habló a obras públicas nunca llegaron, los bomberos se les acabó el agua, ellos estuvieron con toda la intención, como siempre, apoyando y respaldando, este y si me sumo la propuesta que hace en mi compañero, de respaldar esa situación, porque, incluso, hoy volvió a revivir ese fuego, se decía que era un terreno que de la Armada, la Armada dice es que la mitad si me pertenece, y es el que está limpio pero la otra mitad no, hoy se pidió el apoyo al Ayuntamiento, que nos buscará quién es el dueño de ese predio, pues también para que se haga responsable y lo tengan limpio, porque son predios muy, muy grandes. Gracias.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Tiene el uso de la voz el compañero Rogelio Rueda.

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la presidencia quiero compartir dos, tres comentarios breves. Primero que compartimos el fondo de la preocupación, que están ocurriendo este tipo de

incidentes, y que se aprecia que las capacidades de la autoridad para enfrentarlas, están siendo rebasadas en los hechos, y que, como representantes de los colimenses tenemos que ocuparnos de que esto no ocurra, de que tengan los elementos necesarios, para atender estas eventualidades. En el fondo tenemos creo una coincidencia difícilmente habrá alguien que no esté de acuerdo en que esto se atienda así. Segundo pedir que para efectos de que el congreso pueda tener una intervención que sea más eficaz, que realmente incida en la atención del asunto, no nos quedemos en aprovechar al congreso en una de las vertientes que puede tener, que es llamar la atención de la población, a través de los medios de comunicación, o de las autoridades correspondientes por el hecho de que lo planteamos aquí en la tribuna, eso ya está satisfecho con lo que se hizo, pero yo diría que vale la pena que demos el siguiente paso el concreto, el que tiene que ver con los procedimientos, que si hay un planteamiento concreto específico que se plantee, podamos, con las comisiones correspondientes, participar y transformarlo en una determinación del congreso que exhorte, o que incluso solicite información, para tomar las determinaciones que correspondan. Recordemos que no se trata sólo en nuestra función de modificar las leyes, a lo mejor de hacerlas más precisas, para saber qué le toca a cada quien y que debe tener a la mano para atenderlo. Recordemos que nuestra labor de fiscalización ya, no solo se refiere a cómo se gasta el dinero, así se cumple con la normatividad al gastar cada peso, sino si se está cumpliendo con las funciones que cada autoridad tiene en su ámbito de responsabilidad. Entonces, lo que creo que puede ocurrir es que aterrizamos en identificar, ¿dónde están los problemas? y que el congreso puede intervenir de manera muy precisa. Ejemplo, ha habido en los medios de comunicación información de que los recursos de siniestralidad, que se le llaman, y que se cobran a los establecimientos comerciales al emitir las licencias, y que deben estar dirigidos a las instancias de protección civil, a los bomberos, a la cruz roja, hay algunos ayuntamientos que no los han hecho llegar oportunamente, es decir, ahí están los recursos, no se entregan a quienes deben atender estos casos, nos encontramos con que la realidad, no tenemos los recursos para atender el problema, y se quedaron por ahí en alguna tesorería municipal, es

apenas un ejemplo, creo que si somos precisos podemos ser más eficaces en nuestra labor como Poder Legislativo. Muchas gracias.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Muchas gracias compañero Diputado. Tiene el uso de la voz el compañero Diputado Fernando Antero.

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con su venia Diputada Presidenta. Creo que lo que acaba de plantear el compañero Luís Fernando, legislador por Manzanillo, no es un tema menor, y quisiera que no lo abordaremos así, porque en muchas ocasiones cuando hablamos del tema de siniestros, incendios, fenómenos meteorológicos, que tienen que ver con huracanes y demás, en muchas ocasiones, solamente somos reactivos y creo que el planteamiento que hace qué hace el Diputado Luís Fernando lo acaba de bajar perfectamente el diputado Rueda, y lo acaba de transformar precisamente en algo muy concreto. Y bueno desde luego, Acción Nacional se suma al posicionamiento, pero también se suma la sugerencia de bajarlo en un planteamiento muy concreto, desde la Comisión de Protección Civil, me gustaría sugerirlo. Habla del tema del fondo de siniestralidad, hablamos de tres niveles de gobierno, hablamos de que esta temporada, en particular, está rebasando por mucho, las temperaturas a lo largo y a lo ancho del estado, vemos ya incendios de hectáreas en la zona costera, ya hay problemas también en Tecomán, y creo que el Congreso el Estado debe de hacer algo, la intención es de que se pueda convocar a una reunión desde la comisión que nos convoca la Comisión si lo sugiere así, yo está de acuerdo el Diputado Luís Fernando, que sea convocada por la Comisión de Protección Civil y que pudiéramos iniciar un diagnóstico de: ¿qué es lo que está sucediendo a partir de los tres niveles? y ¿cómo podemos empezar a articular un trabajo más colegiado, con todos los órdenes, con todos los órdenes de gobierno?. Creo que estamos a tiempo, es vamos iniciando apenas el mes de abril, y vienen temporadas verdaderamente críticas, muy fuertes, de temperaturas seguramente viene problemas también de huracanes, e históricamente el Congreso nada más viene y posiciona, pero sí creo que debe de ser un articulador de todos los

órdenes de Gobierno, para a la brevedad empezar a trabajar de algo muy concreto, y me da mucho gusto también, que aquí hay fuerzas políticas como es el caso de MORENA que pueden tener un enlace directo con el Ejecutivo Federal, habida cuenta, de que el gobierno del estado y los propios ayuntamientos, puedan tener mayor fuerza de prevención y no de reacción. Y también ver la manera de cómo podemos buscar mayores recursos, para tener verdaderamente instituciones o corporaciones, en materia de protección civil, que puedan defender principalmente a los ciudadanos, pero también al medio ambiente. Vaya pues la intención es de que podamos iniciar un trabajo concreto desde la Comisión de Protección Civil y desde luego Acción Nacional, aún cuando no esté en esta comisión, se suman los trabajos de diagnóstico y de trabajos concretos. Es cuánto Diputada Presidente.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Tiene el uso de la voz el Diputado Fernando Escamilla.

DIPUTADO LUIS FERNANDO ESCAMILLA VELAZCO. Gracias compañeros pues muchas gracias, la intención era de involucrarnos todos, porque si algún día hemos trabajado por algo y verlo destruido en fracción de segundos es muy doloroso, entonces les agradezco la intención a todos. Espero que se convoque esa reunión lo antes posible ya que yo considero estuve en el lugar que es una emergencia que hay que atacar lo antes posible, y si yo nunca había sabido que el congreso participara en un mecanismo de, de ataque porque este tipo de formas deben de atacar en el momento, no participar de las cenizas, hay que anticiparnos y se acepta, se aceptan los comentarios. Muchas gracias.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Gracias compañero Diputado. Continuando con asuntos generales, se le da el uso de la palabra a la Diputada Araceli García.

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Con su venia Presidenta. En esta ocasión, me permito presentar una Iniciativa de Reforma, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima. Para ello, me permito exponer de la siguiente manera, un

resumen de la misma, solicitando que sea incluida en el diario de los debates, en forma íntegra y se turne a las comisiones legislativas correspondientes.

La Diputada Araceli García Muro integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, del ejercicio constitucional 2018-2021, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción l, 83 fracción l y 84 fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Asamblea**,** una **Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto** por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE COLIMA, mismo que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En la actualidad, en el Estado de Colima, se vive una realidad muy distinta a la de hace algunos años para los adultos mayores, quienes se enfrentan a una sociedad adversa e indiferente a sus necesidades como son, la escasez económica, la atención médica y la imposibilidad de acceder a una fuente de trabajo formal por problemas de salud inherentes a su edad la cual dificulta proveerse lo necesario para vivir dignamente, aunado a ello la soledad o desinterés de la familia a sus necesidades, así como otros factores más que afectan su desarrollo en la sociedad.

Para disminuir los efectos adversos a los que se enfrentan los adultos mayores, resulta necesaria la coordinación de los entes gubernamentales que por razón de sus competencias deben atender esta problemática y para ello, es un imperativo que la Legislatura Estatal le provea de las herramientas legales que les permitan la prevención y solución de todos aquellos factores de los cuales hoy se adolecen los adultos mayores.

En esa tesitura, es que las autoridades federales, estatales y municipales tutelando los derechos de este sector han establecido un sistema permanente de apoyos y programas de integración social de los adultos mayores, con la finalidad de lograr un efectivo desarrollo e integración, que les permita una vida digna y decorosa.

La protección a los adultos mayores es un tema que ha tomado relevancia en los estudios legislativos, siendo este grupo un sector vulnerable que necesita principal atención, es por ello que el artículo 6o de Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en orden federal impone como obligación del Estado el garantizar las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores.

Sin embargo, si bien es cierto que el Estado ha implementado programas sociales encaminados a lograr el bienestar y el acceso a una vida digna de este sector vulnerable, también lo es que los mecanismos usados para proporcionar los apoyos han dejado advertir una falta de transparencia, inequidad y muchas veces discriminación, es por ello que con la presente iniciativa, entre otros aspectos fundamentales, se busca trasparentar el padrón de adultos mayores que sirve como base en el proceso de entrega de apoyos, mismo que se encuentra contemplado en la fracción XIX, del artículo 14, de la Ley para la Protección de los Adultos en Mayores del Estado de Colima.

La violencia, abuso y maltrato de adultos mayores en México es un problema que en los últimos años se ha incrementado, a pesar de la existencia de tratados internacionales y leyes federales que se han creado para obtener la protección de los adultos mayores. El Estado de Colima cuenta con una ley especial publicada el 11 de septiembre de 2004 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", denominada Ley Para la Protección de los Adultos en Mayores del Estado de Colima, que tiene como objetivo establecer las normas de protección y los

derechos de los adultos mayores, con la cual se pretende integrar a los adultos mayores a la sociedad en sus ámbitos productivo, cultural y educativo, entre otros.

Con el fin de que la violencia que sufran los adultos mayores del Estado sea sancionada en términos de la Ley de la materia y, en su caso, también por las leyes penales, es que se adiciona el artículo 36 Bis, en el que se define los distintos tipos de violencia que sufren los adultos mayores, con lo cual, se busca facilitar de las herramientas legales a las autoridades a fin de proteger a este importante sector social.

La suscrita Diputada destaca que la presente iniciativa busca la armonización de la legislación estatal en materia de adultos mayores con la federal y en ese contexto se propone que la ley estatal en su artículo 1º, describa con mayor precisión que es lo que ésta regula y en el artículo 2°, contemple como adultos mayores a aquellas personas físicas a partir de los 60 años o más, en los mismos términos de la Ley Federal de la misma materia.

De igual manera, otro de los objetivos fundamentales de la presente iniciativa, lo constituye que las distintas autoridades en la materia tengan entre sus obligaciones verificar e informar sobre la calidad de la sobrevivencia de los adultos mayores, esto es, que se conozca cómo viven los adultos mayores del Estado y se actúe en consecuencia en favor de aquellos que requieran del apoyo de alguna institución y sus servicios, por lo que se propone reformar el artículo 8º y adicionarle un segundo párrafo.

En el mismo sentido, se propone reformar la fracción XXV del artículo 9º, para establecer como un derecho de las personas adultas mayores se sujetas de todos los servicios que le garanticen el respeto a su dignidad de adulto mayor, si se encuentra en situación de riesgo o desamparo.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.-Se reforman los artículos 1°; fracciones I, II y V del 2°; fracción III del 4°; 5°; 6°; 7°; 8°; la denominación del capítulo II; primer párrafo y las fracciones XIII, XVIII y XXV del 9º; 10; la denominación del Titulo Segundo; 11; 12; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIV del 14;16; la fracción V del 17; 23; fracción V del 24; la denominación del capítulo III, primer y segundo párrafo del 27; el primer párrafo y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,XI y XII del 29; 30; 31; la fracción I del 32; 33; 34; 35; primer párrafo del 36; 37; 38; 39; 40; 41; primer párrafo del 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50: 51;primer párrafo del 52;primer párrafo del 53; primer párrafo y las fracciones IX y X del 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; fracción I del 62; 65; 66; segundo párrafo del 67 Bis 1, 67 Bis 2 y 69, 70, segundo párrafo del 75; asimismo, **se adicionan** las fracciones I, II y III al artículo 1º, un segundo párrafo al artículo 8º, una fracción VI al artículo 17; un cuarto párrafo al artículo 27 y el artículo 3 Bis; todos de la LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE COLIMA"; para quedar como sigue:

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general, su objeto es establecer las normas de protección y los derechos de los Adultos **Mayores**, para que puedan integrarse a la vida social, productiva, cultural y educativa, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:

I. La política pública estatal para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores;

II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración estatal y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública del Estado; y

III. El Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores;

Artículo 2°.-…

I. ADULTOS MAYORES: A toda persona física de 60 años de edad o más;

II. LEY: A la Presente Ley para la Protección de los Adultos **Mayores** del Estado de Colima;

III a la IV. …

V. INSTITUTO: Al Instituto para la Atención de los Adultos **Mayores**;

VI a la VIII. …

Artículo 4°.-. …

I a II. …

III. Fomentar la participación y apoyar la actividad de las organizaciones privadas cuyas acciones vayan orientadas a favorecer a los adultos **mayores**, a través de apoyos técnicos, humanos, laborales y de servicio.

Artículo 5°.- Las Dependencias Estatales y Municipales dentro de sus planes, proyectos y programas que lleven a cabo, deberán incluir de manera expresa el apoyo a los adultos **mayores**.

Artículo 6°.- Corresponde a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud y Bienestar Social, así como al DIF Estatal, apoyar al Instituto para promover la interrelación sistemática de acciones a favor de los adultos **mayores** que lleven a cabo las instituciones públicas; además de realizar estudios e investigaciones en la materia y participar en programas de educación para adultos, psicología de la vejez, planeación de servicios asistenciales, ejecución de programas en relación con la vejez, nutrición, salud y brindar asistencia social a este sector de la población.

Artículo 7°.- El Ejecutivo del Estado a través del Instituto, promoverá, ejecutará y coordinará con la Federación y los Municipios convenios de colaboración, para que las Instituciones Públicas de Salud y Asistencia Social implementen programas preventivos hacia los adultos **mayores**, brinden información gerontológica disponible en los ámbitos médico, socioeconómico, jurídico y demás relativos, con el objeto de incrementar la cultura del adulto mayor.

Artículo 8°.-Corresponderá al titular del Poder Ejecutivo a través del Instituto, a los Ayuntamientos, a los sistemas DIF, Estatal y Municipales, a las instituciones públicas y privadas en el ámbito de su competencia y a las familias de los adultos **mayores**, verificar e informar **sobre la calidad de la sobrevivencia de los adultos mayores, así como** conocer y difundir la presente Ley.

La información obtenida de lo previsto en el párrafo anterior, se adicionará al padrón de adultos mayores con el fin de que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, brinden y presten los servicios que señala esta Ley, en favor de los adultos mayores que así lo requieran.

CAPITULO II
De los Derechos de los Adultos Mayores

Artículo 9º.- Son derechos que la Ley reconoce y protege a favor de los adultos **mayores**:

I a la XII. …

XIII. Recibir orientación por parte del gobierno estatal y municipales mediante iniciativas de acción que puedan servir de base para políticas integrales referidas a los adultos **mayores**;

XIV alaXVII. …

XVIII. De asociarse y conformar organizaciones de adultos **mayores** para promover su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a ese sector;

XIX a la XXIV. …

XXV. Ser sujetos de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas de atención integral, **así como todos los servicios que le garanticen el respeto a su dignidad de adulto mayor,** si se encuentra en situación de riesgo o desamparo.

Artículo 10.-En el Estado de Colima, los adultos **mayores** gozarán de las facilidades de tránsito que les otorgue la presente Ley y la Legislación Vial, debiéndose promover las adecuaciones urbanísticas y arquitectónicas acordes a las necesidades de este sector de la población, siendo responsables de toda acción u omisión. Asimismo promover campañas de difusión y medidas en materia de educación vial.

TITULO SEGUNDO
DEL INSTITUTO PARA LA ATENCION DE LOS ADULTOS MAYORES

Artículo 11.- Se crea el Instituto para la atención de los Adultos **Mayores** como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y fines.

Artículo 12.-Este organismo público tiene por objeto coordinar todas las acciones públicas a favor de los adultos **mayores**, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la presente Ley.

El Instituto deberá unificar criterios con las demás Instituciones que den servicio a los adultos **mayores**, elaborando conjuntamente planes, proyectos y programas para brindarles apoyo integral, evitando duplicidad de servicios.

Artículo 14.-…

I. Impulsar las acciones del Estado y la sociedad, para promover el desarrollo humano integral de los adultos **mayores**, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico y social del Estado;

II. Proteger, asesorar, atender y orientar a los adultos **mayores** y coadyuvar en la prestación de servicios de orientación jurídica con las instituciones correspondientes;

III. Ser el órgano de consulta y asesoría obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y, en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen programas relacionados con los adultos **mayores**;

IV. Establecer principios, criterios, indicadores y normas para el diseño, análisis, ejecución y evaluación de las políticas dirigidas a los adultos **mayores**, así como para jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la materia, a efecto de atenderlas mediante los programas impulsados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, por los municipios y los sectores privado y social, de conformidad con sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia;

V. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez; revalorizar los aportes de los adultos **mayores** en los ámbitos social, económico, laboral y familiar; así como promover la protección de sus derechos y el reconocimiento a su experiencia y capacidades;

VI. Promover en coordinación con las autoridades competentes, en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a los adultos **mayores**, en las instituciones, casas hogar, o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y calidez, cumpliendo con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral;

VII. Brindar la capacitación que requiera el personal de las instituciones, casas hogar, o cualquier otro centro que brinden servicios y atención a los adultos **mayores**;

VIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, o cualquier otro centro de atención para los adultos **mayores**, para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad y calidez de vida;

IX. al X. …

XI. Celebrar convenios con los gremios de comerciantes o prestadores de servicios para obtener descuentos en los precios de los bienes y servicios que presten a la comunidad a favor de los adultos **mayores**;

XII. …

XIII. Promover la participación de los adultos **mayores** en todas las áreas de la vida pública, a fin de que sean copartícipes y protagonistas de su propio cambio;

XIV. Promover, fomentar y difundir en la población una cultura de protección, comprensión, cariño y respeto a los adultos **mayores**;

XV. Promover y difundir las acciones y programas de atención integral a favor de los adultos **mayores**, así como los resultados de las investigaciones sobre la vejez y su participación social, política y económica;

XVI. Promover la suscripción de convenios con las instituciones de educación superior para la realización de estudios de investigación social para impulsar el desarrollo humano integral de los adultos **mayores**;

XVII. …

XVIII. Otorgar pensiones a los adultos **mayores**, en los términos establecidos en esta Ley y su reglamento;

XIX. Llevar un padrón de adultos **mayores actualizado y con transparencia;**

XX. Expedir credenciales de afiliación a las personas adultas **mayores** con el fin de que gocen de beneficios que resulten de las disposiciones de la presente ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables;

XXI. Expedir calcomanías oficiales con código de seguridad y el logotipo que identifique a las personas adultas **mayores**;

XXII. Llevar el registro de personas físicas o morales que de manera altruista presten ayuda a los adultos **mayores**;

XXIII. …

XXIV. Proponer reconocimientos a las personas físicas o morales que se hayan distinguido en la promoción y defensa de los derechos de los adultos **mayores**; y

XXV.…

Artículo 16.- El Consejo Directivo es el órgano de gobierno del Instituto, responsable de la planeación y del diseño y programación de las políticas públicas anuales que permitan coordinar y ejecutar los programas y acciones a favor de los adultos **mayores**.

Artículo 17.- …

I. al III. …

IV. Un representante del Consejo Estatal de Población;

V. Un representante del Poder Legislativo, que presida la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos **Mayores** y Discapacidad; **y**

VI. Hasta tres representantes del sector social y tres del sector privado quienes serán invitados por el titular del Poder Ejecutivo, que por su experiencia en la materia, puedan contribuir con el objeto del Instituto.

Artículo 23.- El Instituto tendrá un Director General y los servidores públicos administrativos, operativos y técnicos que requiera para el cumplimiento de su objeto, los cuales deberán acreditar estudios mínimos de carrera técnica en Geriatría, por ningún motivo la plantilla laboral administrativa debe superar a aquella que brinda atención a los adultos **mayores**.

Artículo 24.- …

I. al IV. …

V. Contar con estudios comprobables en el área de Geriatría.

CAPÍTULO III
Del Consejo Técnico de los Adultos Mayores

Artículo 27.- El Instituto contará con un Consejo Técnico de Adultos **mayores**, que tendrá por objeto dar seguimiento a los programas, opinar sobre los mismos, recabar las propuestas de la ciudadanía con relación a los adultos **mayores**y presentarlas al Consejo Directivo.

Este Consejo se integrará con diez adultos **mayores**de sobresaliente trayectoria en el área en que se desempeñen, de manera equitativa en cuanto a género, los cuales serán seleccionados por el Consejo Directivo a convocatoria formulada a las instituciones públicas, privadas y sociedad civil.

…

Responsabilidad Administrativa. El consejo Técnico podrá solicitar la remoción del Director General cuando considere que ha actuado contraviniendo los fines del programa y apoyo del Instituto.

Artículo 29.- Corresponde a los Titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, a las Secretarías, al DIF, a los Gobiernos Municipales y a las dependencias y organismos públicos descentralizados, en los ámbitos de su competencia, acatar los siguientes derechos con relación a los adultos **mayores**:

I. Derechos Humanos: Difundir y constatar que se cumplan los derechos humanos de los adultos **mayores** por los organismos correspondientes;

II. Procuración de Justicia: proveer de mejores acciones, simplificando trámites en caso de que el adulto mayor sea la víctima;

III. Asistencia Social: impulsar la prestación de servicios asistenciales a los adultos **mayores** en situación de abandono o marginados, en los términos que marque la Ley de la materia;

IV. Bolsa de Trabajo: Implementar un sistema estatal de Bolsa de Trabajo, donde se rescate el potencial de los adultos **mayores** ante el sector empresarial y la sociedad en general;

V. Educación: Promover y fomentar cursos de educación básica o de capacitación para que los adultos **mayores** puedan incrementar su potencialidad;

VI. Deportes y Recreación: Fomentar la organización y participación de los adultos **mayores** en actividades deportivas, creando espacios dentro de los campos deportivos para ellos;

VII. Cultural: Fomentar la cultura nacional entre los adultos **mayores** y difundirla por medio de exposiciones y otros medios;

VIII. Turismo: Promover el turismo en forma accesible de los adultos **mayores**, en el interior del estado o fuera de éste por medio de la creación de clubes de la tercera edad;

IX. Comunicación Social: Implementar en los medios de comunicación impresos y electrónicos, la apertura de cápsulas y programas especiales a favor de los adultos **mayores**;

X. …

XI. Vivienda Digna: Promover créditos a bajas tasas o subsidios, para el mejoramiento físico de las viviendas de los adultos **mayores**, así como brindarles la oportunidad de acceder a una vivienda digna y decorosa que cumpla con las necesidades de desplazamiento; y

XII. Premios y Reconocimientos: Reconocer y premiar a los adultos **mayores** más destacados dentro de las siguientes categorías:

a) y b) …

Artículo 30.- El otorgamiento de estímulos, premios y reconocimientos, se hará a aquellos hombres y mujeres adultos **mayores** que se hayan distinguido en el: trabajo, deporte, ciencia, arte, labor humanística y profesional.

Articulo 31.- El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda y seguridad social, procurando con ello el desarrollo integral de los adultos **mayores**. Asimismo deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. El Estado promoverá la existencia de condiciones adecuadas para los adultos **mayores**, tanto en el transporte público como en los espacios arquitectónicos;

Articulo 32.- …

I.- Organizar, operar, supervisar y evaluar acciones que en materia de asistencia social se lleven a cabo para modificar y mejorar las condiciones de carácter social que impidan al adulto **mayor** su desarrollo integral;

II. …

Artículo 33.- El Estado promoverá la publicación y difusión de esta Ley para que la sociedad y las familias respeten a los adultos **mayores** y otorguen el reconocimiento a su dignidad.

Artículo 34.- Ningún adulto **mayor** podrá ser objeto de discriminación en ningún espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico o mental, creencia religiosa o condición social.

Artículo 35.- La población en general tiene el deber de aceptar a los adultos **mayores** en las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad, evitando su marginación o discriminación, o hacerlos objeto de burla, de abuso o simple indiferencia, para lo cual el DIF Estatal y Municipal en coordinación con el Instituto y con la participación de las dependencias y entidades del Estado, diseñarán e instrumentarán programas y campañas permanentes de cortesía

urbana y respeto hacia los adultos **mayores** debiéndose difundir las mismas en los medios masivos de comunicación existentes en la Entidad.

Artículo 36.-Cuando algún ciudadano cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, o violencia en contra de un adulto mayor, que ponga en riesgo su persona y derechos, serán sancionados conforme a la Ley.

…

Artículo 36 Bis. Los tipos de violencia contra los Adultos Mayores, son:

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas;

III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; hecha excepción de que medie acto de autoridad fundado o motivado;

IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través

de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder; y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de los Adultos Mayores.

Artículo 37.-La familia del adulto **mayor** deberá cumplir su función social de manera constante y permanente, debiendo velar por el, responsabilizándose de proporcionarle lo necesario para su atención y desarrollo integral, protegiéndolo, apoyándolo, y evitando que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona y derechos, caso contrario, serán sancionados conforme la Ley.

Artículo 38.- Todo adulto **mayor**, tiene derecho a permanecer en su hogar del cual no podrá ser expulsado, debiéndole asegurar la convivencia familiar, salvo que el cumplimiento de este derecho peligre por causas socioeconómicas, ambientales o de salud, en tal caso, las instituciones públicas competentes procurarán las condiciones que se requieran para superar la problemática familiar, así como la capacitación y orientación de los descendientes.

Cuando por circunstancias especiales el adulto **mayor** sea separado judicialmente de su familia, tendrá derecho a la protección y asistencia por parte del Instituto.

Artículo 39.-La medida cautelar de protección tendiente a remover temporalmente del seno familiar al adulto mayor, sólo se aplicará, cuando la conducta que la originó sea atribuible a alguien que conviva con él y no exista otra alternativa. En

todo caso deberá informarse al adulto **mayor** en forma adecuada sobre los motivos que justifiquen esa medida escuchándose su opinión.

Artículo 40.- El derecho de los adultos **mayores** a percibir alimentos se garantizará en los términos previstos en el Código Civil vigente en el Estado.

Artículo 41.- Cuando el obligado a dar los alimentos al adulto **mayor** se tuviera que ausentar o presentare incapacidad temporal o imposibilidad de hecho para cumplir con esa obligación, el Estado procurará brindar supletoriamente los alimentos por medio de su incorporación a procesos de promoción social y desarrollo humano, mediante programas interinstitucionales en los que, de acuerdo con su situación particular, intervendrán los sistemas DIF Estatal y Municipal.

Artículo 42.- Son derechos que esta Ley reconoce y protege a favor de los adultos **mayores** los siguientes:

I. al III. ….

Artículo 43.- Los adultos **mayores** tendrán derecho a hacer uso de los asientos y espacios preferentes, que para tal efecto sean destinados en las unidades de transporte público de pasajeros.

Artículo 44.- El Instituto, conjuntamente con las autoridades, establecerá programas tendientes a que toda institución pública o privada que brinde servicios a las personas adultas **mayores**, cuente con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como los recursos humanos necesarios para procedimientos alternativos en los trámites administrativos.

Artículo 45.- Los adultos **mayores** tendrán derecho a la salud en los términos que determine la Ley de Salud del Estado.

Artículo 46.- Los adultos **mayores** gozarán de atención médica oportuna en los centros y servicios públicos de prevención y atención de la salud, los que

procurarán prestar en forma inmediata el servicio que requieran sin discriminación de raza, género, condición social ni nacionalidad, debiendo recibir una cartilla medica de salud y auto cuidado, misma que será utilizada indistintamente en las instituciones públicas y privadas, en la cual se especificará el estado general de salud, tipo de sangre, medicamentos, dosis, alergias y dieta suministrada.

Artículo 47.- Los adultos **mayores** deberán recibir los programas de detección oportuna y tratamiento temprano de enfermedades crónicas degenerativas y neoplasias, así como de atención y asistencia a quienes sufren de discapacidades funcionales.

Artículo 48.- Los adultos **mayores** deberán ser vacunados contra enfermedades que las autoridades de salud determinen.

Artículo49.- Cuando un adulto **mayor** requiera de internación por enfermedad grave o incurable, los hospitales y clínicas públicas o privadas, proporcionarán las condiciones necesarias para la permanencia de los descendientes, representante legal o encargado.

Artículo50.- En todos los centros de salud públicos o privados a donde se lleve para su atención a un adulto **mayor**, los directores y el personal encargado de los mismos estarán obligados a denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha razonable de maltrato o abuso cometido en contra de ellos. Igual obligación tendrán las autoridades y el personal de centros educativos, estancias, o cualquier otro sitio en donde permanezcan ó se atienda algún servicio a éstas personas.

Artículo 51.- Cuando un adulto **mayor** maltratado o en condiciones de pobreza carezca de parientes o de obligado preferente, recibirá atención por parte del Estado, a través de los programas de las instituciones afines.

Artículo 52.- Todo adulto **mayor** tendrá derecho a participar en actividades recreativas, deportivas y culturales, que les permitan ocupar provechosamente su

tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral, con las únicas restricciones que la Ley señale. Corresponde en forma prioritaria a los descendientes y representantes, darles las oportunidades para ejercer estos derechos.

…

Articulo 53.- Los Ayuntamientos establecerán las políticas públicas necesarias y ejecutarán las acciones pertinentes para facilitar, a los adultos **mayores** los espacios adecuados a nivel comunitario y estatal que les permitan ejercer sus derechos recreativos y culturales.

…

Articulo 55.- La prestación de servicios asistenciales a los adultos **mayores** comprenderá:

I. al VIII. …

IX. Creación de bolsas de trabajo para adultos **mayores**;

X. Integración a clubes de adultos **mayores**; y

XI. …

Articulo 56.- Los servicios sociales para los adultos **mayores** tienen como objetivo garantizar el logro de adecuados niveles de desarrollo personal y de su integración a la comunidad.

Articulo 57.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta Ley todos los adultos **mayores** tendrán derecho a los servicios sociales de orientación familiar, de información, actividades culturales, recreativas, deportivas y ocupación del tiempo libre.

Artículo 58.- La orientación familiar tendrá como objetivo la información a las familias, su capacitación y adiestramiento para atender a la estimulación de los adultos **mayores** y a la adecuación del entorno familiar para satisfacerles sus necesidades.

Articulo 59.- Los servicios de información oficiales deben facilitar a los adultos **mayores** el conocimiento de las prestaciones que estén a su alcance, así como las condiciones de acceso a las mismas, para ello el Instituto con el apoyo del DIF Estatal y Municipales, establecerá oficinas de atención y recepción de quejas.

…

Articulo 60.- Las actividades deportivas, culturales, recreativas y de uso del tiempo libre de los adultos **mayores**, se desarrollarán preferentemente en las instalaciones que al efecto tenga el DIF Estatal y los DIF municipales y los que se integren a través de los convenios de colaboración respectivos.

Articulo 61.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Desarrollo Social, establecerá con la participación del Instituto programas de promoción del empleo para los adultos **mayores**, creando al efecto una bolsa de trabajo en la que se concentren listas de aspirantes con sus aptitudes y capacidades.

Artículo 62.- …

I. Subsidios a las Instituciones de asistencia social y privada encargadas del cuidado y atención del adulto **mayor**;
II. Al IV. ,,,

Artículo 65.- El Instituto elaborará, vigilará y mantendrá actualizado de manera permanente y transparente, el padrón de adultos **mayores** beneficiarios de la pensión.

Artículo 66.- Las solicitudes de pensión, trámites, verificación de requisitos y demás procedimientos necesarios que debe llevar a cabo el adulto **mayor** para el

ejercicio de este derecho, así como los que debe realizar el Instituto para determinar la procedencia de la pensión, se fijarán en el Reglamento de esta Ley que el Ejecutivo del Estado para tal efecto expida.

Artículo 67 Bis 1.- …

Todas las instituciones de orden público y privado del Estado, garantizarán que en sus instalaciones existan las condiciones necesarias, para que se les dé a los adultos **mayores** un trato digno, especial y prioritario al momento de realizar un trámite personal, otorgándoles sillas de espera y una fila preferencial.

Artículo 67 Bis 2.- Cualquier estacionamiento, encierro o pensión, público y privado, deberá disponer de por lo menos el 10% de cajones para personas adultas mayores debidamente identificadas con calcomanía oficial. Este espacio para **personas adultas mayores** deberá compartirse para personas con discapacidad.

El Instituto dispondrá los lineamientos y características de las calcomanías oficiales con logotipo para la identificación de las **personas adultas mayores,** así como el procedimiento para su expedición.

Articulo 69.- La orientación ocupacional tendrá en cuenta las potencialidades reales de los adultos **mayores**, tomando como base la educación escolar recibida, la capacitación laboral o profesional y las perspectivas de empleo existentes en cada caso; asimismo, la atención a sus motivaciones, aptitudes y preferencias vocacionales.

Artículo 70.- Las empresas, industrias, comercios y establecimientos en general cuyo capital sea privado, procurarán contratar a personas adultas **mayores**, en el caso de que así les sea solicitado por éstas, quienes deberán presentar el certificado de capacitación correspondiente.

Artículo 75.-…

En los casos de infracciones por incumplimiento a los deberes contenidos en el capítulo IV del Título Tercero de la presente Ley, así como de las infracciones que cometa un individuo que no sea familiar del adulto **mayor**, las sanciones las aplicará la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, dependiente del DIF Estatal, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo, el Instituto y los Ayuntamientos de la Entidad, en su caso, deberán adecuar sus reglamentos internos de conformidad con lo que se dispone en el mismo.

TERCERO.- En atención a lo dispuesto en el artículo 8º, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo a través del Instituto y en coordinación con los sistemas DIF, Estatal y Municipales, los Ayuntamientos y las instituciones públicas y privadas en el ámbito de sus competencias, deberá verificar e informar sobre la calidad de sobrevivencia de los adultos mayores e incluir esa información al padrón de la materia, que permita conocer y ubicar en el Estado, a los adultos mayores con alguna carencia y que requieran de los servicios que se brindan por mandato de la Ley de Protección del Adulto Mayor del Estado de Colima, lo anterior e términos de las previsto en el presente Decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”

La suscrita Diputada solicita que la presente iniciativa se turne a la Comisión o Comisiones competentes para efectos del trámite legislativo que corresponda.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA, 04 DE ABRIL DE 2019.

DIP. ARACELI GARCÍA MURO

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Muchas gracias compañera Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica..... Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, gracias compañera. Continuando con asuntos generales, se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Antero.

DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Agradezco la atención Diputada, declino mi participación, para que pueda proseguir en asuntos generales.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Muy bien compañero Diputado. Continuando con asuntos generales, la última intervención del Diputado Vladimir Parra.

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Perdón, lo que pasa es que si creo que es un asunto importante, nada más un exhorto. A nombre del grupo parlamentario de MORENA, vamos a hacer un exhorto, para pedir que se nos clarifique, lo que está pasando en la ex Zona Militar, de las oficinas que hay ¿en cuánto tiempo se van a salir. Les vamos a leer la exposición de motivos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 26 de noviembre de 2018, mediante acuerdo administrativo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la desincorporación a favor del Gobierno del Estado de Colima, del predio ubicado en Av. Pedro A. Galván Norte número 502, Colonia Centro, de Colima, Colima, correspondiente a la ex 20a zona militar.

El 6 de abril de 2018, el Gobernador Ignacio Peralta instaló una Comisión ciudadana para la planeación de la utilización de este predio, que se formaliza el 15 de mayo de 2018 con el Decreto respectivo, y que está conformada por 21 organizaciones, entre las que por cierto no se encuentra ninguna especializada en el tema del medio ambiente.

Sin embargo, aunque el Gobernador del Estado se ha mostrado abierto al diálogo en el tema, y ha declarado que se conservará la vegetación existente en el predio, se ha tomado la decisión de establecer en él, varias oficinas de gobierno, lo que implicaría un posible riesgo a la conservación del lugar y sobre todo, la anticipación de la toma de decisión unilateralmente o el letargo de esta, sobre su uso definitivo.

Hasta el momento, de la información que se tiene, 5 dependencias se han instalado: el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda (INSUVI), la imprenta de Gobierno del Estado, la Auditoría Fiscal, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), y el cuerpo de Bomberos de Colima.
Respecto del tema, no se ha dado la información clara de manera pública y oficial sobre la justificación de estas decisiones, sobre el tiempo en que estas dependencias estarán en este lugar o si se plantea instalar alguna otra, ni mediante declaraciones ni mediante los acuerdos publicados por el Ejecutivo del Estado.

Los terrenos de la Ex zona militar tienen una gran importancia dado que este espacio conforma uno de los pocos pulmones que quedan en la Ciudad. Las políticas de los gobiernos anteriores se han caracterizado por permitir, poco a poco, que estos espacios verdes sean destruidos y que los espacios públicos vayan reduciéndose cada vez más, para beneficio de particulares.

No podemos permitir que los pocos espacios que quedan con estas características, como el de la ex zona militar, tengan el mismo destino; debemos cuidar que su uso beneficie directamente a la población.

En atención a las consideraciones vertidas, y en de conformidad con las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, los integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes puntos de:

ACUERDO

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura…

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Permítame compañero Diputado**,** conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima solcito a los presentes y a los compañeros Diputados guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con esta Sesión, gracias.

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Gracias Diputada.

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente al C. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, titular del Ejecutivo del Estado de Colima, para que informe a esta Asamblea cuáles son las dependencias, instituciones u organismos que se han instalado actualmente en el predio ubicado en Av. Pedro A. Galván Norte número 502, Colonia Centro, de Colima, Colima, correspondiente a la ex zona militar y si se tiene previsto la instalación de otras; la justificación para tomar dicha decisión sin antes haberse definido su utilización; así como el tiempo que permanecerán dichas dependencias, en este lugar y las medidas que se han tomado para el cuidado del espacio verde que se conforma en el predio.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes.
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126, fracción II de su reglamento, solicito

respetuosamente que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a su discusión, y aprobación al momento de su presentación.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con fundamento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Vladimir Parra, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica, si es aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIPUTADA PRESIDENTA FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Vladimir Parra. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Recordarles compañeros que el día 10 de abril, es el Parlamento Infantil a partir de las 10:00 de la mañana, los esperamos para estar todos presentes. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros Diputados a la sesión solemne a celebrarse el día 11 de abril del año 2019, a partir de las 11:00 de la mañana. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 13 horas con 42 minutos, del día 4 de abril del año 2019, declaro clausurada esta Sesión Pública Ordinaria Numero 2, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia, muchas gracias.